



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIII - N° 1848

Bogotá, D. C., jueves, 31 de octubre de 2024

EDICIÓN DE 22 PÁGINAS

DIRECTORES:

SAÚL CRUZ BONILLA

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO (e)

www.secretariasenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 387 DE 2024 CÁMARA

por medio de la cual se establecen los parámetros generales para la creación de la Política Pública Nacional de Reasentamientos Integrales y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, 16 de octubre de 2024

Secretario General

JAIME LUIS LACOUTURE

Cámara de Representantes

Bogotá

Asunto: Proyecto de Ley "Por medio de la cual se establecen los parámetros generales para la creación de la Política Pública Nacional de Reasentamientos Integrales y se dictan otras disposiciones"

Respetado secretario general:

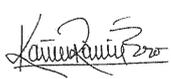
En concordancia con el artículo 154 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 140 de la Ley 5ª de 1992, en nuestra condición de Congresistas de la República nos permitimos presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el presente Proyecto de Ley "Por medio de la cual se establecen los parámetros generales para la creación de la Política Pública Nacional de Reasentamientos Integrales y se dictan otras disposiciones"

En este sentido, se presenta a consideración el presente proyecto de ley, para iniciar el trámite correspondiente y cumplir con las exigencias dictadas por la ley y la Constitución.

De las y los Honorables Congresistas,

ANDRÉS CANCEMANCE LÓPEZ Representante a la Cámara – Putumayo Pacto Histórico	LEIDER ALEXANDRA VÁSQUEZ OCHOA Representante a la Cámara por Cundinamarca PACTO HISTÓRICO

ERICK VELASCO BURBANO Representante a la Cámara por Nariño Pacto Histórico	JUAN PABLO SALAZAR RIVERA Representante a la Cámara CITREP-1 (Cauca, Nariño y Valle del Cauca)
ALIRIO URIBE MUÑOZ Representante a la Cámara por Bogotá Coalición Pacto Histórico	MARY ANNE ANDREA PERDOMO Representante por Santander Congreso de la República maryperdomo@camara.gov.co
SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA Senadora de la República Partido COMUNES	ROBERT DAZA GUEVARA Senador de la República Pacto Histórico-Polo Democrático
CRISTIAN DANILO AVENDAÑO FINO Representante a la Cámara por Santander	PEDRO JOSÉ SUÁREZ VACCA Representante a la Cámara Pacto Histórico - Boyacá

 EDUARD SARMIENTO HIDALGO Representante a la Cámara por Cundinamarca Pacto Histórico	 Jorge Hernán Bastidas Rosero Representante a la Cámara por el Cauca Pacto Histórico	<p style="text-align: center;">PROYECTO DE LEY No. “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PARÁMETROS GENERALES PARA LA CREACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE REASENTAMIENTOS INTEGRALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><i>El Congreso de Colombia</i></p> <p style="text-align: center;">DECRETA</p> <p>Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los parámetros generales para la formulación, implementación y evaluación de la política pública nacional de reasentamientos integrales en Colombia (PPNRI)</p> <p>Artículo 2. Objetivos. La PPNRI tendrá como objetivos, los siguientes</p> <ol style="list-style-type: none"> Definir los parámetros para la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos de reasentamiento a nivel nacional, en zonas libres de amenazas antrópicas o naturales y sin afectar determinantes ambientales, a fin de brindar condiciones de seguridad, garantía de derechos y dignidad para las personas, comunidades y familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y desplazados internos como consecuencia de desastres naturales, cambio climático y factores ambientales, la violencia y el conflicto armado interno, proyectos de desarrollo e infraestructura, proyectos extractivos y por declaratoria de áreas protegidas y de especial interés ambiental, entre otros que puedan generar reasentamientos en Colombia. Mitigar y compensar los impactos a los pobladores originados por el desplazamiento cuando éste sea inevitable. Garantizar el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población desplazada, promoviendo la reconstrucción del tejido económico y psicosocial. Definir los lineamientos generales de los planes sociales orientados a la atención y acompañamiento de la población en proceso de reasentamiento.
 LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO Representante a la Cámara por el Huila Pacto Histórico - PDA		
 ETNA TÁMARA ARGOTE CALDERÓN Representante a la Cámara por Bogotá Pacto Histórico PDA-LLS	 Carmen Ramírez Boscán Representante a la Cámara Circunscripción Especial Internacional	<p>heterogeneidad socioeconómica de los pobladores para establecer acciones diferenciales en los temas en los que se identifiquen vulnerabilidades, incluyendo las de género y las generacionales</p> <p>Protección de grupos en situación de discriminación histórica. Adoptar enfoques diferenciados y garantizar la incorporación de una perspectiva interseccional e intercultural, que tome en cuenta la posible agravación y frecuencia de violaciones a los derechos humanos en razón de factores como la raza, etnia, género, edad, el país de nacimiento, o la posición económica.</p> <p>Participación y consentimiento previo e informado. Durante la planeación, ejecución y evaluación del proceso de reasentamiento, las personas, familias y comunidades afectadas tendrán derecho a la participación y a la consulta y consentimiento previo e informado en el caso de los grupos étnicos.</p> <p>Dignidad. Se entiende como el inicio del proceso hacia el goce efectivo de los derechos vulnerados, mediante la respuesta efectiva de las entidades responsables de la reubicación y reasentamiento, bajo un enfoque sustitutivo, transformador y de equidad, que garantice el trato digno y no discriminatorio permitiendo así la inserción en los procesos sociales, económicos y culturales de los hogares reasentados o reubicados y a la reconstrucción de los procesos colectivos y comunitarios determinados por la relación íntima con el territorio</p> <p>Inclusión. El reasentamiento de la población incorporará enfoques y acciones con perspectiva de género, diferencial, poblacional, territorial, ambiental, sociocultural, económico y el apoyo a la provisión de servicios sociales, en pro del cumplimiento del derecho a la inclusión social.</p> <p>Información. La población en proceso de reasentamiento recibirá información transparente, clara, veraz y oportuna sobre sus derechos, deberes y obligaciones, en consecuencia, el plan de reasentamiento, así como todos los programas y actividades proyectadas, serán difundidas por las entidades y actores responsables, y validadas por las personas, comunidades y familias reasentadas.</p> <p>Mejoramiento del ordenamiento urbano y rural. El plan de reasentamiento debe contribuir al ordenamiento urbano y rural, armonizándose con las disposiciones previstas por los entes territoriales, y aportando al desarrollo territorial sostenible</p> <p>Mitigación del Riesgo. El ejercicio de la acción urbanística tendrá dentro de sus principios orientadores básicos la prevención de los riesgos naturales en el territorio para cuyos efectos realizarán los estudios necesarios y las medidas de mitigación con el objeto de garantizar que los desarrollos de vivienda se realicen en suelos aptos para el efecto.</p> <p>Celeridad. Las entidades responsables de la ejecución de las acciones y actividades relacionadas con los reasentamientos, asignarán los recursos físicos, profesionales,</p>
<ol style="list-style-type: none"> Diseñar e implementar el reasentamiento como una estrategia para contribuir al mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de los territorios Garantizar la participación ciudadana en la formulación, seguimiento a la implementación y evaluación de la PPNRI. Garantizar el acompañamiento social, técnico, jurídico y operativo antes, durante y posterior al reasentamiento Determinar factores diferenciales de atención para la población reasentada Definir los elementos y acciones fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los procesos de reasentamiento y reubicaciones 	<p>Artículo 3. Principios. La PPNRI se orientará por los siguientes principios y enfoques:</p> <p>Reconocimiento del bloque de Constitucionalidad. Harán parte integral de la PPNRI los Principios internacionales relacionados con personas desplazadas, reconocidos en el bloque de Constitucionalidad en Colombia, independientemente de la naturaleza del desplazamiento o de las circunstancias que lo originaron</p> <p>Enfoque de derechos. El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) o enfoque de derechos, es un marco conceptual que busca contribuir al proceso de desarrollo humano y orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos de las personas.¹ El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación.²</p> <p>Igualdad. Poblaciones y familias en condiciones similares y afectadas por la misma actividad, factor o fenómeno, tienen derecho a recibir igual trato, y a contar con similares prerrogativas de asistencia y apoyo para el restablecimiento</p> <p>Restablecimiento de condiciones de vida. Toda persona, comunidad o población afectada por la pérdida de vivienda o trabajo, tiene derecho a recibir asistencia y apoyo en el restablecimiento de sus condiciones anteriores, sin importar la forma de tenencia o de uso que acredite del inmueble</p> <p>Equidad. Las soluciones de reasentamiento deben ser pertinentes a los impactos causados por el desplazamiento involuntario. Deben tener en cuenta tanto la diversidad cultural como la</p>	
<p>¹ https://www.unicef.org/chile/media/7021/file/mod%201%20enfoque%20de%20derechos.pdf</p> <p>² https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos</p>		

<p>administrativos y financieros necesarios y suficientes para la ejecución de los planes de reasentamiento en el tiempo previsto, evitando mayores impactos en la calidad de vida y derechos de la población reasentada.</p> <p>Sustentabilidad ambiental. Los procesos de reasentamiento deben preverse desde una perspectiva de profundo respeto por la naturaleza y los lugares que serán intervenidos. Además de garantizar condiciones seguras en términos geomorfológicos, se respetarán las determinantes ambientales del lugar y se fortalecerán las condiciones y funciones de los ecosistemas allí presentes, como una estrategia de integralidad.</p> <p>Artículo 4. Definiciones.</p> <p>Reasentamiento. Es el proceso integral de intervención y acompañamiento a la población desplazada que tiene como propósito el diseño e implementación planificada de mecanismos, planes, programas y proyectos, orientados a la recuperación y reubicación de los hogares amenazados, a la protección de los derechos de las personas desplazadas, y al restablecimiento del tejido económico, social y ambiental con el objetivo de mejorar los niveles de vida que tenía la población antes del desplazamiento, bajo criterios de seguridad, mitigación del riesgo y desarrollo sostenible.</p> <p>Desplazados internos. Los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internamente reconocida.</p> <p>Riesgo de desastres. Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza, exposición a la amenaza y vulnerabilidad global.</p> <p>Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.</p> <p>Vulnerabilidad. Es la incapacidad de resistencia de una comunidad cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse y absorber de manera autónoma, los efectos de una amenaza que pueda generar un determinado cambio en su medio ambiente,</p>	<p>medios de vida y lugar de habitación. Tiene que ver con la inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio negativo, que para la comunidad constituye un riesgo. La intensidad de los daños que produce la materialización del riesgo sobre la comunidad está directamente relacionada con su grado de vulnerabilidad para enfrentarlo.</p> <p>Gestión del riesgo. Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entendiéndose: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.</p> <p>Exposición. Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza A medida que se genera exposición frente a la amenaza, aparece la vulnerabilidad.</p> <p>Riesgo climático. Es la probabilidad de pérdidas socioeconómicas y de ecosistemas por eventos climatológicos, lo que se traduce en la evaluación de la exposición, la amenaza y la vulnerabilidad</p> <p>Artículo 5. Atención con enfoque diferencial. Se garantiza la incorporación del enfoque diferencial en todas las etapas del proceso de reasentamiento, reconociendo las características particulares de la población reasentada, en razón de su edad, etnia, género, orientación sexual, capacidades diversas, auto identificación campesina.</p> <p>Artículo 6. Mesa técnica Nacional. Créase la mesa técnica nacional para la formulación e implementación de la Política Pública Nacional de Reasentamientos de Colombia. Esta mesa técnica queda conformada por un (01) delegado (a) de las siguientes entidades del Estado, sin perjuicio de otras que puedan vincularse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 3. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD 4. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV 5. Unidad de Restitución de Tierras URT 6. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 7. Agencia Nacional de Tierras 8. Ministerio de Transporte 9. Agencia Nacional de Infraestructura 10. Ministerio de Minas y energía
<ol style="list-style-type: none"> 11. Departamento Nacional de Planeación 12. Parques Nacionales Naturales 13. Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 14. Comité Nacional para el conocimiento del riesgo 15. Comité Nacional para el Manejo de Desastres <p>Parágrafo 1. Se establecerán los criterios y mecanismos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía en la formulación de la Política Pública Nacional de Reasentamientos en un tiempo no mayor a los seis (6) meses posteriores a la promulgación de esta ley</p> <p>Parágrafo 2. En el proceso de formulación de la PPNRI, cada entidad concurrirá y planteará los lineamientos que considere específicos y necesarios, en el marco de la normatividad vigente que rige a cada sector involucrado, articulando los parámetros definidos en esta ley a sus procedimientos, protocolos y marcos de política sectorial en materia de reasentamientos y reubicaciones.</p> <p>Parágrafo 3. Se invita a participar de manera voluntaria a Organismos internacionales como Naciones Unidas y organismos multilaterales con experiencia y desarrollo en materia de Reasentamientos como el Banco Mundial Banco y/o Banco Interamericano para el Desarrollo entre otros, a la Mesa nacional de reasentamientos y se convocará a Universidades del país para que, en el marco de su autonomía, se vinculen al proceso de formulación de la PPNRI.</p> <p>Artículo 7. Plan estratégico Nacional. La Mesa técnica Nacional, creará un Plan estratégico de implementación de la Política Nacional de Reasentamientos, definiendo objetivos, indicadores, cronograma, metas para la administración, en el nivel nacional y regional, a partir de los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad.</p> <p>Parágrafo 1. En la construcción del Plan Estratégico de implementación de la PPNRI, se tendrán en cuenta las acciones institucionales contempladas en la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias y lo establecido en la Estrategia nacional de coordinación para la adaptación al cambio climático de los asentamientos y reasentamientos humanos, en lo que corresponda.</p> <p>Parágrafo 2. En el caso de los procesos de reubicación de población víctima de desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, se tendrán presentes los criterios y disposiciones referentes a los procesos de retornos y reubicaciones establecidos en la normativa vigente.</p> <p>Parágrafo 3. En el Plan Estratégico Nacional se definirán los mecanismos que conlleven a la estandarización y unificación de categorías, variables, indicadores e instrumentos metodológicos y técnicos a nivel nacional con el fin de guiar a las entidades públicas y privadas que adelanten procesos de reasentamiento, independiente de la causa que lo haya generado, y de garantizar igualdad, equidad e inclusión a la población reasentada.</p>	<p>Artículo 8. Planificación local de Reasentamientos. Las alcaldías Municipales en coordinación con el Departamento y la Nación, regularán y reglamentarán los procesos de reasentamiento en consonancia con los parámetros y principios establecidos en esta ley y con lo establecido en la PPNRI, desarrollando protocolos, herramientas e instrumentos eficaces para el reasentamiento y la reubicación de las personas desplazadas internamente, que respeten integralmente los estándares obligatorios de derechos humanos, integrándolos, en el marco de su autonomía, a los planes de desarrollo locales y planes de ordenamiento territorial</p> <p>Parágrafo 1. Se fortalecerá la capacidad técnica y operativa de las entidades territoriales para el reasentamiento a nivel local, a partir de procesos de formación y asistencia técnica promovidos desde las entidades nacionales.</p> <p>Artículo 9. Registro de Reasentamiento. La UNGRD, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el Departamento Nacional de planeación, o quienes hagan sus veces, crearán, gestionarán y actualizarán un Sistema de Registro de personas, familias y comunidades reasentadas, en coordinación con las entidades territoriales con el objetivo de consolidar y sistematizar la información del nivel nacional y regional en materia de atención a personas desplazadas y reasentadas, a fin de evitar la duplicidad de acciones y beneficios</p> <p>Artículo 10. Seguimiento y evaluación. Les corresponde a las entidades responsables de la formulación e implementación de la PPNRI, establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Reasentamientos, garantizando la participación ciudadana.</p> <p>Parágrafo. Con el objetivo de evaluar la implementación de la Política Nacional de Reasentamientos Integrales y verificar la calidad del proceso regulatorio, así como la efectividad de las medidas, programas, proyectos y actividades que de ella se deriven, el Departamento Nacional de Planeación realizará seguimiento y análisis de impacto normativo a través de La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP).</p> <p>Artículo 11. Financiación. La Nación, a través de las entidades responsables de la ejecución de la PPNR en el nivel nacional, dispondrá la asignación, reorganización y redistribución de los recursos físicos, humanos, presupuestales y financieros necesarios para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la Política Pública Nacional de Reasentamientos en el marco de las asignaciones incorporadas anualmente en el Presupuesto General de la Nación, en colaboración armónica con las distintas entidades e instituciones involucradas, respetando el principio de sostenibilidad fiscal y el marco fiscal de mediano plazo.</p> <p>Parágrafo 1. El Fondo Nacional de adaptación concurrirá en la ejecución de esta política, a través de proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial, regional, participativo, de justicia ambiental, integral e intersectorial</p>

Parágrafo 2. Las entidades territoriales y los Fondos de Desarrollo Local, en el marco de su autonomía y obligaciones legales vigentes, podrán concurrir con recursos de sus presupuestos en la implementación de esta política pública y destinarán las partidas requeridas para garantizar los procesos integrales de reasentamiento según corresponda.

Parágrafo 3. La Mesa técnica Nacional en el marco del Plan estratégico de implementación de la PPNR, definirá los criterios para la gestión de recursos financieros y técnicos de Cooperación Internacional y diplomacia humanitaria.

Parágrafo 4. Las empresas privadas y públicas que, en la ejecución de proyectos de desarrollo, obras e infraestructura, minería y otros proyectos extractivos, pongan en riesgo o causen desplazamiento y reasentamiento involuntario de la población en su área de influencia, destinarán los recursos necesarios y suficientes para la construcción participativa de los Planes de Reasentamiento y de su implementación, integrando marcos de compensación, indemnización y todas las medidas necesarias para el restablecimiento de las condiciones de vida de la población afectada, atendiendo el principio de debida diligencia, garantizando las buenas prácticas en reasentamientos, y siguiendo los lineamientos de esta política, las obligaciones establecidas por las entidades competentes, así como los estándares internacionales.

Artículo 12. Gestión Social Integral. En el marco del enfoque de derechos, las entidades nacionales y territoriales deberán garantizar a las familias y comunidades reasentadas la oferta institucional necesaria para acceder a los servicios de salud, educación y programas de integración social dirigidos a población vulnerable, entre otros.

Parágrafo. Análisis del Riesgo de Empobrecimiento. En el caso de personas, familias y comunidades reasentadas involuntariamente pertenecientes a sectores marginados y de bajos ingresos, se priorizará en los diagnósticos, planes y medidas adoptadas, el análisis de riesgo de mayor empobrecimiento debido a la pérdida de tierras, vivienda y medios de producción, pérdida de empleo, y pérdida de acceso a servicios y derechos sociales, colectivos y culturales.

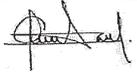
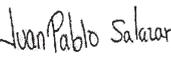
Artículo 13. Seguimiento y control de Zonas de riesgo no mitigable e instrumentos de planificación territorial. Los predios identificados en alto riesgo no mitigable, serán declarados, conforme a la normatividad vigente, como suelo de protección y zonas de riesgo no mitigable y esa información será tenida en cuenta en todos los instrumentos de planificación territorial. Para garantizar que estas áreas no sean nuevamente ocupadas por la población reasentada u otras comunidades, se crearán estrategias o programas de control y seguimiento a obras públicas y otras intervenciones en el territorio.

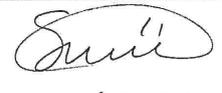
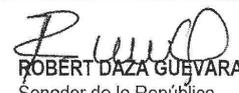
Artículo 14. Comisión de seguimiento. El Congreso de la República creará una comisión de seguimiento a la formulación, implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Reasentamientos Integrales.

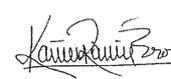
Artículo 14. Reglamentación. El Gobierno Nacional reglamentará esta ley durante el año siguiente a su entrada en vigencia.

Artículo 15. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

De las y los Honorables Congresistas,

 ANDRÉS CANCEMANCE LÓPEZ Representante a la Cámara – Putumayo Pacto Histórico	 LEIDER ALEXANDRA VÁSQUEZ OCHOA Representante a la Cámara por Cundinamarca PACTO HISTÓRICO
 ERICK VELASCO BURBANO Representante a la Cámara por Nariño Pacto Histórico	 JUAN PABLO SALAZAR RIVERA Representante a la Cámara CITREP-1 (Cauca, Nariño y Valle del Cauca)
 ALIRIO URIBE MUÑOZ Representante a la Cámara por Bogotá Coalición Pacto Histórico	 MARY ANNE ANDREA PERDOMO Representante por Santander Congreso de la República maryperdomo@congreso.gov.co

 SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA Senadora de la República Partido COMUNES	 ROBERT DAZA GUEVARA Senador de la República Pacto Histórico-Polo Democrático
 CRISTIAN DANILO AVENDAÑO FINO Representante a la Cámara por Santander	 PEDRO JOSÉ SUÁREZ VACCA Representante a la Cámara Pacto Histórico - Boyacá
 EDUARD SARMIENTO HIDALGO Representante a la Cámara por Cundinamarca Pacto Histórico	 Jorge Hernán Bastidas Rosero Representante a la Cámara por el Cauca Pacto Histórico
 LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO Representante a la Cámara por el Huila Pacto Histórico - PDA	

 ETNA TAMARA ARGOTE CALDERÓN Representante a la Cámara por Bogotá Pacto Histórico PDA-LLS	 Carmen Ramírez Boscán Representante a la Cámara Circunscripción Especial Internacional
---	--

<p style="text-align: center;">EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO _____ DEL 2024</p> <p style="text-align: center;">“POR MEDIO DE LA CUAL ESTABLECEN LOS PARÁMETROS GENERALES SE PARA LA CREACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE REASENTAMIENTOS INTEGRALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”</p> <p style="text-align: center;">I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY</p> <p>La presente ley tiene por objeto establecer los parámetros generales para la formulación, implementación y evaluación de la política pública nacional de reasentamientos en Colombia (PPNR). Este objeto general se desglosa en finalidades específicas que deben orientar una política pública integral, independiente del tipo de desplazamiento forzado o involuntario.</p> <p>Algunos de estos objetivos son: Definir los parámetros para adelantar procesos de reasentamiento en zonas libres de amenazas antrópicas o naturales, en condiciones de seguridad, y garantía de derechos y dignidad para las personas, comunidades y familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y desplazados internos como consecuencia de la violencia y el conflicto armado interno, desastres naturales y factores ambientales, proyectos de desarrollo, proyectos extractivos y por declaratoria de áreas protegidas y de especial interés ambiental. Mitigar y compensar los impactos a los pobladores originados por el desplazamiento cuando éste sea inevitable. Garantizar el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población desplazada, promoviendo la reconstrucción del tejido económico y psicosocial. Definir los lineamientos generales de los planes sociales orientados a la atención y acompañamiento de la población en proceso de reasentamiento. Diseñar e implementar el reasentamiento como una estrategia para contribuir al mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de la ciudad. Garantizar la participación ciudadana en la formulación, seguimiento a la implementación y evaluación de la PPNR. Garantizar el acompañamiento social, técnico, jurídico y operativo antes, durante y posterior al reasentamiento. Determinar factores diferenciales de atención para la población reasentada y</p>	<p>definir los elementos y acciones fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los procesos de reasentamiento y reubicaciones, entre otros³.</p> <p style="text-align: center;">II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA</p> <p>En Colombia, pese al importante desarrollo en materia de atención del riesgo y gestión de desastres y al amplio marco normativo e institucional que rodea el fenómeno del desplazamiento interno por causa del conflicto armado, existen vacíos y deficiencias en materia de Reasentamientos, independiente del tipo de desplazamiento, así como la ausencia de una política pública nacional sobre el tema (Buitrago 2018, Duque 2006).</p> <p>El impacto del desplazamiento forzado e involuntario en Colombia, no solo como producto de la violencia y el conflicto armado, desastres naturales, factores ambientales y cambio climático, sino también en razón a proyectos de desarrollo como obras públicas, infraestructura, proyectos extractivos entre otros, es muy alto, y la respuesta institucional en materia de reasentamientos, además de ser sectorizada o individualizada de acuerdo a cada proyecto o situación, en el mejor de los casos, no cuenta con unos parámetros y lineamientos generales y desde enfoques integrales que superen los procesos de reasentamientos enmarcados en el mero enfoque técnico “que prevén la reposición material de los bienes inmuebles, incapaces en dar soluciones integrales en hechos que además de ser involuntarios, se convierten en traumáticos, invasivos y violentos que generan resistencia y rechazo”⁴</p> <p>Desde una perspectiva de derechos y en referencia a las víctimas del conflicto armado la Corte ha establecido que, “el hecho mismo del desplazamiento constituye un grave atentado en contra de un sinnúmero de derechos fundamentales tales como el derecho a la seguridad, a la integridad personal, a la residencia, a la libre locomoción, al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital, entre otros. Sin embargo, la vulneración de los derechos fundamentales de esta población no se da sólo con ocasión del hecho violento que la obliga a huir de su lugar de residencia. En realidad, la falta de protección pos desplazamiento –período de emergencia o de restablecimiento– es lo que ubica a este grupo poblacional en una especial situación de vulnerabilidad que le impide sobrevivir en condiciones mínimas de dignidad”⁵</p> <p>³ Algunos objetivos, definiciones y principios están basados y/o han sido tomados de documentos oficiales UNGRD, GUIA CIDH, BANCO MUNDIAL, BID, Ley 1523 de 2012, ley 2079 de 2021, principios Deng y Pinheiro entre otros ⁴ López López, José Luis 2022. La defensa del agua y el estatuto del lugar: Estrategia y técnica de reasentamiento posdesastre en Mocoa ⁵ Corte Constitucional. Sentencias SU-1150 y T-1635 de 2000, T-327 y T-1346 de 2001, T-088 de 2002, T-268 de 2003 y T-790 de 2003 En https://www.uesternado.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/Derechos-fundamentales-de-la-poblacion-desplazada.pdf</p>
<p>En relación al desplazamiento por causa de desastres y factores ambientales, la Corte Constitucional asegura que “(...) la legislación en materia de gestión del riesgo de desastres prevé disposiciones orientadas a garantizar la reubicación de las personas ubicadas en asentamientos bajo amenaza, la disponibilidad de albergues temporales en la etapa de respuesta a la emergencia y la posterior reubicación. Sin embargo, no hay lineamientos claros y específicos sobre cómo deben llevarse a cabo los procesos de reubicación, ni cuáles son las garantías y deberes básicos a tener en cuenta para garantizar soluciones duraderas que restablezcan de forma efectiva y, a largo plazo los derechos vulnerados (...) Así mismo, (...) se trata de un marco limitado, pues sólo abarca a quienes son víctimas de desastres, más no a quienes deben desplazarse por factores complejos como la degradación ambiental o fenómenos de evolución lenta. (...) Es decir que, aunque hay una protección jurídica, existe todavía un vacío legal y regulatorio respecto del fenómeno de desplazamiento forzado por razones ambientales que es necesario resolver. Por ello, los remedios jurídicos definidos por la Corte en este caso se adoptan a la luz de dicho déficit, pero también en consideración de las garantías constitucionales y la protección que el derecho internacional ofrece a los desplazados forzados internos, incluidos, a quienes lo hacen por factores ambientales.”⁶</p> <p>Precisamente los desarrollos constitucionales y el marco internacional, establecen niveles mínimos de protección a la población desplazada, reconociéndolos como sujetos de especial protección constitucional debido a su condición de especial vulnerabilidad, como lo destaca la Sentencia T 369 de 20217</p> <p>(...) la garantía adecuada de los derechos de los desplazados implica para las autoridades y particulares responsables obligaciones que se enmarcan en los estándares mínimos de i) proporcionar protección contra los desplazamientos (fase de prevención); ii) garantizar un nivel de vida adecuado al menos en los componentes básicos de alimentos indispensables y agua potable, cobijo y alojamientos básicos, vestido, servicios médicos y de saneamiento, y otros que respondan a las necesidades de los desplazados (fase de protección y asistencia humanitaria durante el desplazamiento) y iii) garantizar el regreso voluntario seguro y digno o el reasentamiento, además de prestar asistencia hasta tanto las personas que retornaron o se reasentaron recuperen en la medida de lo posible aquello de lo que fueron desposeídas. De no ser viable dicha recuperación, se concederá una indemnización adecuada o reparación (fase de soluciones duraderas).</p> <p>Frente a los vacíos normativos y el déficit de protección a las personas reasentadas, algunas investigaciones señalan la existencia de “(...) obstáculos del ordenamiento interno colombiano para asumir los procesos de reasentamiento de población como una medida excepcional de</p>	<p>protección de derechos (...) resaltando “la ineficacia de la actividad administrativa en la atención de población en condición de vulnerabilidad en una lógica asistencialista estatal y no desde un enfoque de derechos”⁸. Desde la perspectiva de la acción institucional y administrativa, se ha evidenciado que se ha otorgado “(...) una amplia discrecionalidad a los municipios para llevar a cabo procesos de reasentamiento que, en la práctica, se manifiestan a través de actuaciones informales –sin regulación especial o protocolos que guíen su ejecución– y que han generado la violación de los derechos humanos”⁹</p> <p>La visión limitada del Reasentamiento, ya sea por la prevalencia de un enfoque puramente técnico, o por la ausencia de regulaciones y protocolos, así como por un desconocimiento del enfoque de derechos, trae consigo consecuencias gravísimas para las poblaciones afectadas, que, aunadas al enorme impacto ya causado por el desplazamiento, terminan profundizando la crisis humanitaria ya existente, por ello es fundamental reiterar que “Sin importar la causa del reasentamiento, el Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos (...)” y que “(...) en la búsqueda de elevar su productividad y recuperar su legitimidad, debe lograr un escenario de corresponsabilidad entre lo político, lo económico y lo social (...)”¹⁰</p> <p>Corresponsabilidad a la que esta iniciativa quiere aportar, integrando en una Política Pública del nivel nacional, parámetros y lineamientos generales, que, orientados por principios, enfoques de derechos y diferenciales, así como por referentes nacionales e internacionales, constituyan un marco normativo y de acción para las entidades nacionales y territoriales en materia de Reasentamientos, entendiendo que el proceso de reasentamiento en cada caso es único y los contextos y condiciones de cada población y territorio son diversas, de allí la importancia de la participación de las comunidades en todas las etapas, ya que son ellas quienes se abocan a la reconstrucción del lugar y del entorno social, cultural y económico.</p> <p>En consecuencia, con lo establecido recientemente en la Sentencia T 123 de 2024, este proyecto de ley reitera que los reasentamientos y reubicaciones, deben “darse dentro de condiciones de voluntariedad, dignidad, seguridad y sostenibilidad”, exigiendo a las entidades que se provea a las personas desplazadas “(...) el apoyo necesario para su sustento económico y se tome en cuenta, en lo posible, las labores a las que se dedicaban antes del desplazamiento y de las cuales</p> <p>⁶ Buitrago, Castro Erika; Echeverri Vélez Juliana Vélez. Procesos de reasentamiento en Colombia: ¿una medida de adaptación y protección de derechos humanos de las víctimas del cambio climático? Universitas no.136 Bogotá Jan./June 2018 https://doi.org/10.11144/averiana.v136.prem.En http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602018000100020 ⁹ Ibid p 1 ¹⁰ Botero Duque, Juan David 2006. El reasentamiento poblacional: fenómeno social, político y de progreso. En: Estudios Socio-Jurídicos., Bogotá (Colombia), 8(1): 145-165, enero-junio de 2006</p>

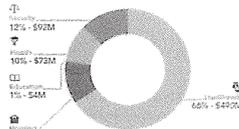
⁶ Sentencia T 123/24

⁷ Tutela en contra de las Empresas Públicas de Medellín por afectaciones a la población Represa Hituango

<p>derivan su sustento. Las decisiones que se tomen para garantizar la reubicación deberán contar con la participación informada de los accionantes¹¹</p> <p>Por estas razones, es imprescindible avanzar en iniciativas que comprendan que el proceso de Reasentamiento de población desplazada forzosa e involuntariamente, debe trascender el componente técnico que se planifica en términos estadísticos, administrativos o monetarios, entendiendo que su esencia es compleja, y aborda el componente social, cultural, económico y político. Complementario a ello, es igual de importante evidenciar el fracaso de los reasentamientos sin o con baja participación de la población, en comparación con casos exitosos en donde las comunidades han tenido la oportunidad de participar de manera incidente en la reconstrucción de su hábitat y su medio de vida (Scudder, 2005, en Serje, 2011; Cernea y McDowell, 2000) (Oliver Smith, 2006; Manz, 2004; Oliver-Smith, 1992, en Serje, 2011).¹²</p> <p>Conceptualización de los procesos de Reasentamiento</p> <p>El proceso de reasentamiento ha sido definido en razón del tipo de desplazamiento que ha conllevado a una población a reasentarse involuntariamente, y al sector o actividad que ha generado el desplazamiento, cuando se trata de causas antrópicas relacionadas con proyectos de desarrollo, construcción de obras e infraestructura y proyectos extractivos. Ante la complejidad de la conceptualización y de la construcción de parámetros y lineamientos para un proceso que involucra múltiples sectores, fenómenos, actividades y poblaciones, cabe retomar las palabras del profesor Stefano Anzellini, cuando afirmó que "(...) la práctica del reasentamiento de poblaciones constituye un desafío, no solo para las instituciones que trabajan en la relocalización de comunidades enteras, al momento de desarrollar proyectos de gran envergadura, sino también para las diversas áreas y disciplinas académicas que, al mantener una mirada crítica frente a los procesos, se ven inmersas en dilemas y conflictos que reconocen como objeto de estudio e intervención"¹³</p> <p>Producto de esos estudios y de la necesidad regulatoria y de planificación de las entidades, se han desarrollado distintos conceptos y aproximaciones a la definición del Reasentamiento. Para empezar, se debe reconocer que los procesos de asentamiento y reasentamiento de la población</p> <p>¹¹En todo caso, el municipio deberá dar a los accionantes el acceso prioritario a programas dirigidos a la garantía de una vivienda digna dentro de los criterios de priorización, gradualidad y progresividad (...) Dicha solución de vivienda podrá enmarcarse en los proyectos de desarrollo urbano para construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos a los que se refiere el artículo 81 de la Ley 1523 de 2012"</p> <p>¹² López López, Jose Luis 2022. La defensa del agua y el estatuto del lugar: Estrategia y técnica de reasentamiento postdesastre en Mocoa</p> <p>¹³ Serje, Margarita, and Stefano Anzellini, editores 2011. <i>Los Dilemas Del Reasentamiento: Debates y Experiencias de La Mesa Nacional de Diálogos Sobre Reasentamiento de Población</i>. 1st ed., Universidad de los Andes, Colombia. P 14</p>	<p>en Colombia, hacen parte de procesos "mayores" o "macro" de configuración y reconfiguración del territorio y, en consecuencia, del ordenamiento territorial tanto institucionalizado y planificado, como de facto, producto de la movilidad y el traslado de la población por diversos factores, con y sin acompañamiento institucional, todo ello en el marco de dinámicas políticas y económicas nacionales e internacionales; En ese contexto cabe afirmar que "(...) los asentamientos y los reasentamientos involuntarios están ligados históricamente a una práctica de transformación de las formas de organización territorial, a la imposición de nuevas culturas económicas y a la facilitación de la extracción de los recursos"¹⁴</p> <p>Independientemente de las razones que los motiven, los reasentamientos se constituyen en una categoría de "transferencia de población" que transforman la organización territorial e imponen una nueva cultura socioeconómica. La población es usualmente es desplazada con la finalidad de extraer recursos naturales o como medio para suplir la demanda servicios y aliviar presión de la población sobre el territorio¹⁵.</p> <p>Debido al impacto que tiene el desplazamiento y posterior reasentamiento, a nivel global se han establecido algunos parámetros mínimos que guíen el proceso de reasentamiento sugiriendo principalmente cuatro fases de ejecución¹⁶:</p> <p>Fase I. Formulación del Plan de reducción de riesgos de desastre y determinación de la pertinencia del reasentamiento: De manera participativa se determina la necesidad de reasentamiento de la población. Se identifican y caracterizan las amenazas del territorio, los elementos expuestos (viviendas y equipamientos), se evalúan las distintas vulnerabilidades, los niveles de riesgo y estimación de pérdidas potenciales, y los niveles de incertidumbre que faciliten la toma de decisiones y se asumen las responsabilidades por las consecuencias frente a riesgos potenciales.</p> <p>Fase II. Preparación para la planeación y ejecución del reasentamiento: En esta fase se miden especialmente los impactos que pueden generar el desplazamiento y el reasentamiento sobre la población, el territorio, la comunidad que continuará en el lugar inicial y en la población receptora. También se prevén aquí los objetivos del reasentamiento preventivo donde se establece fundamentalmente que "por disminuir un riesgo de desastre y salvar la vida y bienes de las personas, no se deben generar riesgos sociales y económicos" (Correa, Ramírez y Sanahuja, 2011, p. 76).</p> <p>¹⁴Serje 2012, 19 En: Cancinmance López, Andrés. Reseña https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/48847/49915</p> <p>¹⁵ Sofestad, 1991, en Serje, 2011; Linebaugh y Rediker, 2005, en Serje, 2011 P 19</p> <p>¹⁶ Correa, Elena, Sanahuja, Haris, Ramírez, Fernando. 2011. Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre / Banco Mundial: GFDRR</p>
<p>Fase III. Análisis para la formulación del programa de reasentamiento: Una vez coordinadas las posibles acciones institucionales, esta fase permite la recopilación, análisis y cruces de datos y análisis de siete variables.</p> <p>Fase IV. Planificación: formulación del programa de reasentamiento: contemplan dos enfoques para el reasentamiento: el individual y colectivo con sus respectivos componentes de información y comunicación, de tierras, infraestructura y acceso a servicios, entrega de viviendas, unidades productivas y traslados, de desarrollo económico y social, entre otros.</p> <p>Para este proyecto de ley, y retomando elementos conceptuales de marcos normativos y de política existentes¹⁷, se entenderá el proceso de Reasentamiento como un proceso integral de intervención y acompañamiento a la población desplazada que tiene como propósito el diseño e implementación planificada de mecanismos, planes, programas y proyectos, orientados a la recuperación y reubicación de los hogares amenazados, a la protección de los derechos de las personas desplazadas, y al restablecimiento del tejido económico, social y ambiental con el objetivo de mejorar los niveles de vida que tenía la población antes del desplazamiento, bajo criterios de seguridad, mitigación del riesgo y desarrollo sostenible.</p> <p>III. MULTICAUSALIDAD DE LOS REASENTAMIENTOS EN COLOMBIA</p> <p>Reasentamientos causados por proyectos de desarrollo, megaproyectos y proyectos extractivos</p> <p>Los desplazamientos causados por proyectos de desarrollo y proyectos extractivos son frecuentes y causan impactos profundos en las poblaciones que se encuentran asentadas en las zonas del desarrollo de megaproyectos, grandes obras de infraestructura, represas, minería etc.</p> <p>Al respecto, la Corte Constitucional "(...) se ha pronunciado en algunas oportunidades frente a las afectaciones que pueden desencadenar las mega obras, destacando que estas envuelven el surgimiento de una situación extraordinaria para un grupo de personas que se enfrentan a una modificación importante de sus condiciones de vida y, a la amenaza de sus derechos fundamentales a la vida digna, al ambiente sano, al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad alimentaria, entre otros. Por ello, se ha sostenido que, al ejecutarse este tipo de megaproyectos, es necesario que el Estado "observe estrictamente los parámetros de protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia"¹⁸.</p> <p>¹⁷ Marco de política de reasentamiento plan todos somos pazífico; entre otros</p> <p>¹⁸ Sentencia T 369 de 2021</p>	<p>A nivel mundial, se estima que entre 1980-1990 al menos 200 millones de personas fueron desplazadas por proyectos de desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2010). En concordancia con esos hechos, la Comisión Mundial de Presas (World Commission on Dams, 2000) reportó que para el año 2000, los proyectos para la ejecución de hidroeléctricas fueron la principal causa al desplazar involuntariamente a 80 millones de personas y de este número, tan solo el 50% lograron restablecer sus medios de vida.</p> <p>En Colombia, en el caso de obras públicas, tomando como referentes los marcos de política y protocolos adelantados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de desarrollo, el Ministerio de Transporte presentó el Marco de Política del proyecto Nacional Urbano, en donde se define el desplazamiento involuntario como el que "se presenta cuando una persona, familia, grupo o actividad económica debe trasladarse obligatoriamente a otro lugar, por una decisión que es impuesta por un agente externo, sin que exista posibilidad de permanecer en el lugar donde habita" y se deja claro que en el caso de ese Proyecto, "el desplazamiento se presentará para las personas que residen en los predios que se requerirán para la construcción y mejoramiento de las obras de infraestructura, así como para las actividades económicas que allí se desarrollan"</p> <p>En cuanto al Reasentamiento, este marco de política, lo considera como "el proceso mediante el cual se apoya a las personas desplazadas para restablecer los niveles de vida que tenían antes del desplazamiento", señalando como ejes centrales: (i) los principios y objetivos de la política de reasentamientos que será aplicada por los ejecutores de los sub-proyectos, (ii) el marco legal que rige la adquisición de predios y el reasentamiento de población, (iii) el procedimiento para la preparación de los planes de reasentamiento y para Ocupantes del Espacio Público – OEP's, (iv) los criterios de elegibilidad de la población beneficiaria de las políticas, (v) los mecanismos de consulta y de solución de quejas y reclamaciones a los cuales puede acceder la población beneficiaria de las políticas en los subproyectos, (vi) los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación y, (vii) la organización institucional y las fuentes de financiación.</p> <p>El Marco de Política de Reasentamiento del Ministerio fue elaborado en 2004, y ajustado en el 2009, 2010 y 2015, "con el propósito de mitigar los impactos del desplazamiento involuntario y apoyar el restablecimiento de las condiciones económicas y el nivel de vida de la población afectada mediante planes de reasentamiento por parte de los Entes Gestores"</p> <p>En el caso de proyectos mineros, es claro que "el desarrollo de grandes proyectos de minería ha implicado el desplazamiento de las poblaciones que han ocupado y usufructuado el territorio donde se construye la operación minera. Sin embargo, estos desplazamientos no suelen llevarse a cabo siguiendo procesos participativos donde los afectados puedan expresar su opinión informada. Las empresas, típicamente, han desplegado mecanismos legales disponibles para compeler o coaccionar la transferencia de tierra y el desplazamiento poblacional. La literatura disponible muestra que la simple adherencia a los derechos legales de los desplazados, tal como</p>

de atención a cada persona en situación de desplazamiento interno en Colombia fue de \$150 usd. por desplazado, en parte se entiende por la capacidad institucional instalada para la atención, sin embargo, el país se convierte en una de las naciones con mayor número de población desplazada

Impacto económico de atención IDCM en Colombia



Fuente: Unveiling the cost of internal displacement 2021.

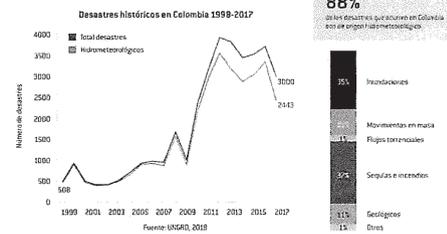
Según las bases del Plan Nacional de Desarrollo "A pesar de que entre 2002 y 2022 se han destinado 219 billones de pesos para la atención y reparación a las víctimas (un promedio de 22 mil millones al año), solamente se ha indemnizado al 14% de éstas, y en 2021 el 50,1% se encontraba en pobreza monetaria. Si el número de víctimas dejara de aumentar hoy, repararlas integralmente podría tomar 67 años y costar, solo en el rubro de inversión, 142 billones de pesos.

Con relación a esta problemática, Colombia adoptó la política nacional de gestión de riesgos de desastres y creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres mediante la Ley 1523 de 2012. La gestión del riesgo vista como un sistema logra la convergencia de un conjunto de procesos de instituciones públicas (nacional, regional y local), comunitarias y cuerpos de socorro en articulación con las políticas, normas, estrategias, planes, procesos, instrumentos y mecanismos existentes, el cual lo lidera el presidente de la república (ver imagen 11). Su objetivo es llevar a cabo un proceso social de gestión del riesgo para mejorar la seguridad, calidad de vida y bienestar para aportar al desarrollo sostenible del territorio.

Para adelantar el proceso de reasentamiento, la Ley 1523 de 2012 establece como principios orientadores del SNGRD: 1. La igualdad de las personas ante el Estado; 2. La protección de la vida de las personas, su integridad física y mental; 3. La solidaridad social entre personas naturales y jurídicas; 4. La autoconservación y las medidas necesarias para lograrlo; 5. La participación de todas las autoridades y entidades del orden nacional, comunidades étnicas, asociaciones cívicas, voluntarios, etc...; 6. De diversidad cultural; 7. De interés público o social; 8. De precaución; 9. De sostenibilidad ambiental; 10. De gradualidad mediante procesos secuenciales, 11. Sistémico en la integración sectorial y territorial; 12. De coordinación; 13. Concurrencia entre entidades públicas y privadas, locales y nacionales; 14. De subsidiariedad y 15. De oportuna información.

En 2018 el país tuvo un avance significativo con relación al registro histórico de desastres con la expedición del Índice municipal de Gestión de Riesgos de desastres. Este documento dejó en evidencia que para el periodo 1998-2016, el 88% de los desastres estuvieron asociados con eventos hidrometeorológicos y el 74% del total de las pérdidas económicas que se generan en el país por desastres, han estado asociadas a esos hechos relacionados con el tiempo atmosférico y con el agua

Desastres en Colombia



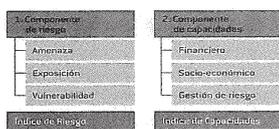
Fuente: DNP, 2018

Lamentablemente en Colombia, la gestión del riesgo se ha centrado en atención de desastres de manera reactiva, no solo por el desconocimiento de la norma por parte de la comunidad (Giraldo y Rodríguez, 2019) sino también por la falta de apoyo del Estado central que adjudique el presupuesto para ejecutar las obras de mitigación para la prevención del riesgo. A pesar del alto impacto en la economía y la afectación a la vida e integridad de las personas, el país no cuenta con un registro histórico de los logros, las dificultades y lecciones aprendidas sobre la atención

y manejo de desastres, de tal manera que cada evento se maneja de manera diferente y según los lineamientos de la gerencia que se designe en el momento (López, 2022).

Como una medida para conocer el nivel de riesgo y de preparación Estatal para hacer frente a los desastres, Colombia con apoyo del Banco Mundial [BM] y el Mecanismo Mundial para la reducción de desastres y recuperación [GFDRR]³⁸, crearon en 2018 el Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades (DNP, 2018), el cual tiene dos componentes: El índice de riesgo de desastre condicionado por los niveles de amenaza, de exposición de la población y los bienes frente a la amenaza y los niveles de vulnerabilidad que se crean por estas condiciones. El componente de capacidades tiene que ver con el nivel de respuesta financiera, socioeconómica y de gestión de riesgo institucional

Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades



Fuente: DNP, 2018

En Colombia, 6,7 millones de personas son vulnerables socialmente y están expuestas a amenazas por inundaciones, movimientos en masa y flujos torrenciales y los departamentos y municipios con menos ingresos per-cápita son los que presentan mayores tasas de afectaciones a la población y a sus bienes. Los desastres asociados eventos naturales evidencian una vulnerabilidad fiscal y se convierten en un gran desafío para la sostenibilidad y estabilidad del país. En el seguimiento realizado a las afectaciones por los eventos hidrometeorológicos en el país entre 1998 y 2016, se encontró que la mayor parte de las afectaciones se generaron a viviendas y estas a su vez, fueron causadas por inundaciones lentas con el 85%, seguido de los movimientos en masa con el 14% y los flujos torrenciales el 1%. Estos porcentajes se invierten al

³⁸ Global Facility For Disaster Reduction and Recovery [GFDRR]

analizar las causas de las muertes, encontrando que el 66% de estas fueron provocadas por los movimientos en masa que ocurren de manera sorpresiva sin dar tiempo a escapar, los flujos torrenciales representan el 19% y las inundaciones lentas un 15%. En promedio, 2800 viviendas fueron destruidas y 160 personas murieron (ver imagen 13) al año (DNP, 2018).

En 2022 las emergencias producto de la variabilidad climática generaron afectaciones acumuladas con un incremento del 46% con respecto al año 2021. En el año 2022, 550.000 fueron afectadas por las lluvias lo que llevó al gobierno a declarar el Estado de desastre.

"En Colombia, fueron más los desplazados por catástrofes que por el conflicto armado en 2023. 293 mil personas dejaron sus hogares por el conflicto armado y 351 mil por desastres"³⁹ y en 2024 la variabilidad climática aumentó, como lo señalaron la Ministra Susana Muhamad "Estamos en una situación absolutamente inusual en la que cada pronóstico se ha ido adelantando" y la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghislaine Echeverry, quien alertó de los "13 meses consecutivos que llevamos con los océanos calientes y 11 rompiendo récords de la temperatura del aire"⁴⁰, lo que aumenta la cantidad de emergencias climáticas y el nivel de riesgo y amenaza al que debemos enfrentarnos, con eventos extremos de sequía de un lado , e inundaciones y lluvias, por el otro. Debido a estos factores el Gobierno Nacional expidió el Decreto 037 de 2024 - "Situación de emergencia nacional", a fin de dictar e implementar medidas efectivas para mitigar los efectos de las altas temperaturas, que ya han llevado a que varios departamentos y municipios del país declaren la calamidad pública.

Viviendas afectadas y muertes por eventos hidrometeorológicos 1998-2016



³⁹ Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno en <https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/ciencias-biologicas/el-fenomeno-del-desplazamiento-por-factores-ambientales>
⁴⁰ <https://www.portafolio.co/economia/regiones/colombia-emergencias-climaticas-que-vivira-el-pais-en-el-segundo-semestre-del-2024-medio-ambiente-604884>

Fuente: (DNP, 2018)

Por fuera del estudio del DNP, se encuentra el último desastre, sucedido en 2017 en Mocoa, capital de Putumayo, donde una avenida fluvio-torrencial causó la muerte de 335 personas y al menos 1462 viviendas urbanas y rurales destruidas, sin embargo, han pasado más de 5 años y tan solo se ha logrado un cumplimiento del 23% con la entrega de 300 viviendas urbanas y 36 rurales en sitio propio. Más de 1.120 familias aún se encuentran en condiciones de desplazamiento forzado y sin una solución definitiva a su problema de vivienda. Su tejido económico y sus redes comunitarias quedaron destruidas con el desastre. Lamentablemente el informe del DNP no incorporó la experiencia de Mocoa y no se encuentra información de nuevas versiones al informe y de su continuidad.

La gestión del riesgo es un proceso que debe ser liderado por la gente que se encuentra vulnerable frente a alguna amenaza y empoderar los ejercicios de conocimiento del riesgo para que estos se mantengan en el tiempo. Para garantizar esta condición, se requiere del Estado para dar el acompañamiento técnico, la formación, las herramientas y uso de técnicas adecuadas que generen capacidad instalada y transferencia de conocimiento, situación que implica generar un registro de las acciones desarrolladas y evaluaciones de lecciones aprendidas. Si alguna de estas situaciones falta o falla, el proceso preventivo del riesgo puede interrumpirse y pueden reconfigurar nuevos escenarios de riesgo. La gestión del riesgo también se propone como el medio más efectivo para actuar de manera preventiva cuando se demuestre que existe un alto riesgo para la población.

En materia de Reasentamientos, la atención de desastres asociados a eventos hidrometeorológicos, el reasentamiento de viviendas debe ser el eje central y una prioridad en el proceso de reconstrucción. La vivienda se reconoce como el núcleo del hábitat humano y de la ciudad donde confluyen las dimensiones socioculturales, físico-ambientales y económicas-financieras; consecuentemente, el reasentamiento debe contemplar estos aspectos para la reconstrucción del tejido económico y social. El reasentamiento posdesastre debería orientarse en al menos cuatro principios: 1. Garantizar la sostenibilidad del territorio, 2. Reubicar en zonas seguras libres de riesgo, 3. Garantizar la participación ciudadana incidente como técnica social y política y 4. Garantizar condiciones iguales o mejores al asentamiento inicial. Estos elementos permitirán generar un proceso de construcción colectiva (López, 2022).⁴¹

Precisamente uno de los elementos centrales en el reasentamiento es la garantía de participación de las comunidades, familias y personas desplazadas, (...) particularmente, desde la formulación del plan de reasentamiento la comunidad debe ser incluida, no únicamente como víctimas de una catástrofe natural sino como actores centrales en la gestión de riesgo de desastres (BID 1999; Naciones Unidas y BID 2007; Correa, Sanahuja y Ramírez 2011). En este

⁴¹ cita

sentido, se destaca la participación desde una perspectiva institucional, pues el deber ser es que desde el mismo proceso e institucionalidad se contemple y se promueva la participación de la población objetivo de la reubicación”⁴²

El desplazamiento por causa de la violencia y el conflicto armado en Colombia

La violencia y el conflicto son la primera causa de desplazamiento forzado en Colombia. Esta situación ubica al país en el tercer lugar con mayor número de desplazamiento forzado a 31 de diciembre de 2021 del mundo, con un total de 5.235.000 desplazados, 292 mil personas adicionales a las 4.943.000 reportadas en 2020, con un crecimiento del 5,91%. Esta cifra es solo superada por Siria y la República Democrática del Congo; sin embargo, la situación de violencia en el 2021 generó un desplazamiento cuatro veces mayor en Colombia respecto a los dos países de medio oriente (ver tabla 01).

Tabla 01: Desplazamiento forzado por conflicto y violencia entre 2020 y 2021

País	2020	2021	Incremento	%
Siria	6.568.000	6.662.000	94.000	1,43
Congo	5.268.000	5.339.000	71.000	1,35
Colombia	4.943.000	5.235.000	292.000	5,91

Fuente: Elaboración propia con base en el IDMC (2021; 2022).

Para la atención de la población víctima de la guerra, el país cuenta con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) del cual hacen parte cerca de cincuenta entidades del Estado del orden nacional y regional. Fue creado en el marco de la Ley 1448 de 2011, con el objetivo de adelantar la estructuración de los diferentes planes, programas y proyectos con las mesas de participación efectiva de víctimas y organizaciones. Este proceso debe articular las distintas políticas públicas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral para las víctimas. La entidad encargada de coordinar el Sistema es la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas – UARIV a través del registro único de víctimas.

⁴² Castillo Cabillos, Mónica Alexandra 2018. Dilemas de la participación en políticas públicas de reasentamiento humano: falla en el diseño del Plan Jarrillón de Cali (2012-2017) En <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/13560/14/7FLACSO-2018MACC.pdf>

Según la Ley 1448 de 2011, se establecen 13 hechos victimizantes:

1. Despojo de tierras
2. Secuestro
3. Extorsión
4. Amenaza;
5. Ataques y pérdida de bienes civiles,
6. atentado contra bienes públicos;
7. Delitos contra la libertad
8. Delitos contra la integridad sexual;
9. Desaparición forzada
10. Homicidio en persona protegida, asesinatos y masacre
11. Accidente por mina antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado
12. Tortura o tratos crueles, inhumanos y degradables;
13. Reclutamiento forzado de niños, niñas o adolescentes. reclutamiento forzado de menores

Al comparar los datos reportados por el IDMC a 31 de diciembre de 2022, (IDCM, 2023) refiere a 4.766.280 personas desplazadas frente a las 8.375.715 personas reportados por la Unidad de víctimas a 31 de diciembre de (UARIV, 2022). El centro de monitoreo aclara que la reducción del 43% tiene que ver con 2.968.943 personas (con corte de 30 de junio de 2022) que han logrado superar las condiciones de vulnerabilidad de desplazamiento, considerando el acceso a servicios básicos fundamentales como “identificación, la salud, la atención psicosocial, la educación, la alimentación, la vivienda, la reunificación familiar y la generación de ingresos” al igual que las personas fallecidas.⁴³

⁴³

Durante el 2022, según la UARIV se presentaron 161.615 nuevos desplazamientos con un incremento del 1.96%⁴⁴. La violencia tuvo una afectación directa a la población étnica, pues el 86% de las personas confinadas pertenecían a comunidades indígenas y afro⁴⁵ (OCHA, 2022).

La cifra de desplazamiento forzado en Colombia estuvo ligada directamente con los confinamientos y restricciones a la movilidad generados por los grupos armados al margen de la ley. En la etapa de la negociación del acuerdo, estas acciones se redujeron de 74 mil en 2013 a tan solo 1.400 en 2017; sin embargo, con el cambio de gobierno, los acuerdos y compromisos pactados por parte del Estado se incumplieron y algunos de los desmovilizados retomaron las armas y el conflicto armado volvió a intensificarse para ubicarse en un total de 108.600 eventos aproximadamente a finales de noviembre de 2022, con tendencia al ascenso (OCHA, 2022).

En 2023, según informes de la Defensoría del Pueblo, “en el país hubo 154 eventos de desplazamiento forzado, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 hechos de la misma naturaleza. El año anterior se presentaron 215 eventos de confinamiento, lo cual significa un incremento del 63% en comparación con el 2022, cuando se registraron 132 (...) fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo, en 17 departamentos (...) Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de los eventos en el 2023”⁴⁶

En 2024 según informes de OCHA, el desplazamiento ha aumentado en un 37%, debido principalmente a la agudización de la confrontación entre grupos armados ilegales. Según la Defensoría, entre enero y mayo, se registraron un total de 73 eventos, 30 más que los acaecidos en la misma época del 2023. Igualmente, ha registrado alrededor de 35 eventos de desplazamiento forzado masivo que han afectado a cerca de 12.000 personas, especialmente en el Pacífico colombiano.⁴⁷

IV. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

⁴⁴ https://www.unidadvictimas.gov.co/es/regik_mstro-unico-de-victimas-ruv/37394
⁴⁵ OCHA, (2022). Panorama de las necesidades humanitarias Colombia https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/colombia_hm_2022_es.pdf
⁴⁶ <https://defensoria.gov.co/-/durante-el-2023-en-colombia-cerca-de-121.000-personas-fueron-v%C3%A1ctimas-de-desplazamiento-forzado-masivo-y-confinamiento>
⁴⁷ <https://defensoria.gov.co/-/defensor-del-pueblo-alerta-sobre-aumento-de-eventos-relacionados-con-el-riesgo-de-desplazamiento-forzado-en-el-pa%C3%AAs>

Principios Deng o Principios Rectores de los Desplazamientos Internos del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas⁴⁸

Los principios Deng "les permiten a los operadores jurídicos interpretar el contenido y el alcance de las obligaciones de los Estados frente a las víctimas en general"⁴⁹ y "constituyen la normativa básica internacional sobre desplazamiento interno en el mundo entero, replantean y compilan las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario"

Estos principios fueron incluidos en el Bloque de constitucionalidad en sentido lato mediante Sentencia T-821 de 2007 de la Corte Constitucional.

Sección II. Principios relativos a la protección contra los desplazamientos	
<i>Principio 2</i> <i>Protección frente al desplazamiento</i> ⁵⁰	1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. 2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades.
<i>Principio 7</i> <i>Prevención del Desplazamiento</i>	1. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos. 2. Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separa a los miembros de la misma familia.
Sección III. Principios relativos a la protección durante los desplazamientos	

⁴⁸Publicados el 11 de febrero de 1998. Sentencia T-327 de 2001: "[l]a interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, los cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad de este caso".

⁴⁹ Sentencia C-330 de 2016.

⁵⁰ La denominación de los principios no se encuentra en el documento original, sino que corresponde al análisis del contenido relevante de cada principio.

<i>Principio 18</i> <i>Derecho al nivel de vida adecuado</i>	1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. 2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes suministrarán a los desplazados internos, como mínimo y sin discriminación, y se cerciorarán de que pueden recibir en condiciones de seguridad: a) alimentos indispensables y agua potable; b) cobijo y alojamiento básicos; c) vestido adecuado; y d) servicios médicos y de saneamiento indispensables.
---	---

Sección IV Principios relativos a la asistencia humanitaria	
<i>Principio 27</i> <i>Consideración de las necesidades de los desplazados</i>	1. Al proporcionar la asistencia, las organizaciones humanitarias internacionales y los demás participantes competentes prestarán la debida consideración a la protección de las necesidades y derechos humanos de los desplazados internos y adoptarán las medidas oportunas a este respecto.

Sección V Principios relativos al regreso, reasentamiento y la reintegración	
<i>Principio 28</i> <i>Regreso voluntario, seguro y digno o reasentamiento voluntario</i>	1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte.

<i>Principio 29</i> <i>Obligación de prestar asistencia a los desplazados que hayan regresado o se hayan reasentado</i>	2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.
--	---

Fuente: Sentencia 369 de 2021

Los Principios PINHEIRO. Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas.⁵¹

Reconocidos como parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato en Colombia Sentencia T-821 de 2007 de la Corte Constitucional.

El Informe del Relator especial, prescribe que los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas tienen por objeto prestar asistencia a todos los actores competentes, tanto nacionales como internacionales, en el tratamiento de las cuestiones jurídicas y técnicas relativas a la restitución de viviendas, tierras y patrimonio en situaciones de desplazamiento en que las personas afectadas se hayan visto privadas de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, tierras, bienes o lugares de residencia habitual.

Estos Principios se aplican por igual a todos los refugiados, desplazados internos y demás personas desplazadas que se encuentren en situaciones similares y hayan huido de su país pero que tal vez no estén encuadradas en la definición jurídica de refugiado (en lo sucesivo, "refugiados y desplazados"), a quienes se haya privado de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, tierras, bienes o lugares de residencia habitual, independientemente de la naturaleza del desplazamiento o de las circunstancias que lo originaron.

Lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH⁵²

lineamiento 8 Retorno, reasentamiento y reintegración local: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Adoptar medidas para garantizar soluciones duraderas a las PDI, sin discriminación y de forma segura, digna, informada y voluntaria, entre las que se encuentran, medidas de retorno, integración local y/o reasentamiento.

Poder Legislativo: Adoptar el marco legal que reconozca y garantice los derechos de las PDI al retorno, la integración local o el reasentamiento voluntario en condiciones de seguridad y dignidad.

Poder Ejecutivo: Diseñar e implementar programas destinados a brindar soluciones duraderas a las PDI, los que deberán incluir, entre otros, los siguientes elementos: Contar con la participación de las PDI a fin de considerar sus necesidades y opiniones. Contar con la

⁵¹<https://www.urt.gov.co/documentos/2013/4/11/Principios+Pinheiro+Restitucion+C3%B3n+Viviendas+Desplazados.pdf?03fe7607-88e3-c37f-1550-06334353882a?e=1576158201642>

⁵²Lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH En <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia-desplazamientointerno.pdf>

participación de organizaciones sociales que trabajan en la promoción y protección de los derechos de las PDI y de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Procuradurías de Derechos Humanos o Defensorías del Pueblo. Desarrollo de políticas claras de descentralización que permitan contar con la participación de los gobiernos locales, con el fin de garantizar la complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. Coordinar las tareas de implementación y evaluar los programas. Llevarse a cabo con la cooperación regional e internacional en los casos en los que resulte necesario. Garantizar la decisión libre e informada de las PDI sobre las posibles soluciones que se les brinde. Asegurar las condiciones de seguridad y dignidad duraderas. Asegurar el trabajo de sensibilización con la comunidad receptora a fin de evitar situaciones de discriminación, estigmatización o violación de derechos de las PDI.

Proporcionar a las PDI asesoramiento legal respecto de las soluciones ofrecidas. Garantizar el acceso a programas de integración económica, acceso a empleo y generación de ingresos y formación profesional. Impulsar programas de microcréditos para garantizar la estabilidad económica. Impulsar subsidios destinados a vivienda. Garantizar el acceso y la titulación de tierras. Garantizar el acceso a programas de apoyo psicosocial. Establecer los mecanismos de difusión de la información vinculada a los programas para que pueda ser conocida por las PDI. Garantizar los mecanismos para que, en caso de ser la voluntad de la PDI, pueda acceder a la protección internacional fuera del país.

Diseñar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas. Estos mecanismos deben tener en cuenta: La realización de informes de monitoreo periódicos que contengan información cuantitativa y cualitativa que den cuenta de la disminución (o no) de los obstáculos en el acceso a derechos de las PDI. La realización de informes de monitoreo periódicos que contengan información cuantitativa y cualitativa que den cuenta de la disminución (o no) de las brechas de desigualdad identificadas al momento de la definición del problema. La realización de encuestas de satisfacción o de otro tipo de instrumentos de evaluación que permitan conocer las percepciones de las PDI. La utilización de la información que se produce a partir de los mecanismos de reclamo como pauta de evaluación del funcionamiento de la política. La realización de consultas u otros mecanismos de participación con actores sociales relevantes para el monitoreo y la evaluación sobre la política. La realización de un proceso de evaluación que cuente con la participación social y que logre determinar la efectividad de la política en términos de realización de derechos y disminución de brechas de desigualdad. La difusión de la información sobre la evaluación de la política en un formato accesible, fácil de entender, y comprensible para los actores involucrados. Garantizar que los niveles de gobierno local participen desde el inicio del proceso de diseño y formulación de las políticas públicas y/o programas destinados al retorno, reasentamiento y reintegración local.

Otros instrumentos internacionales relevantes son:

<p>Marco IASC de soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente</p> <p>Convención de la Unión Africana para la protección y la Asistencia de los desplazados internos de África Convención Kampala 2009</p> <p>Principios básicos y directrices de las Naciones Unidas sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, 2007</p> <p>Política Operativa y documento antecedente OP-710 de BID (1998)</p> <p>La entidad propone dos enfoques para abordar esta problemática</p> <p>I. Aspectos estructurales o claves:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evitar el reasentamiento o reducirlo al mínimo explorando todas las alternativas, entendiéndose como una actividad compleja, costosa y arriesgada que generalmente no logra restablecer ni mejorar las condiciones socioeconómicas de la población afectada. Definir el alcance de la política, determinando: la elegibilidad de los afectados que para tal efecto se definen como “desplazados” y el proceso de reubicación y rehabilitación como “reasentamiento”. Establecer los tipos de financiamiento, diferenciando entre el reasentamiento voluntario e involuntario, y entre el proceso urbano y rural. Evitar el empobrecimiento en el marco de seis riesgos causados por: la pérdida del acceso a la vivienda o a la tierra, de empleo, la inseguridad alimentaria, el deterioro de la salud debido a enfermedades relacionadas con el agua, la pérdida de oportunidades de educación y la desarticulación de las redes social y la pérdida del acervo cultural. Garantizar la participación de la comunidad de manera oportuna para que el plan se adecue a sus problemas y necesidades. Un proceso participativo asegura un mayor grado de aceptación y permite consolidar propuestas más realistas y flexibles. Tratar asuntos específicos de comunidades indígenas. Este tema debe evolucionar a una atención con enfoque diferencial para atender todas las comunidades étnicas. Incluir aspectos de género, especialmente para mitigar los impactos del desplazamiento que son más severos en las mujeres. Garantizar la rehabilitación e indemnización con un plan de reasentamiento que sea una oportunidad para el desarrollo económico y social más allá de la reparación material, que permita a los reasentados recuperar su nivel de vida e integrarse a la nueva comunidad. 	<p>II. Aspectos operacionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> Definir un cronograma y ciclo del proyecto Garantizar un control del área de reasentamiento para evitar que las personas retornen a las zonas de riesgo u otra población invadida las áreas recuperadas. Adquirir las tierras necesarias a precios justos para los reasentamientos Establecer un marco institucional de cooperación para el reasentamiento Garantizar un seguimiento y evaluación al proceso Presentar informes de monitoreo. <p>V. MARCO NORMATIVO NACIONAL</p> <p>En materia de desplazamiento forzado:</p> <p>Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia."</p> <p>Ley 1448 de 2011."Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones."</p> <p>Decreto 2569/2000 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 2007/2000 Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 7º, 17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento.</p> <p>Decreto 250/2005 Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones</p> <p>Decreto 4633/11 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas.</p> <p>Decreto 4634/11 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano.</p>
<p>Decreto 4635/11 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.</p> <p>Decreto 4800/11 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 4829/11 Por el cual se reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras.</p> <p>Resolución 00351 de 2015 - Unidad para las Víctimas Por la cual se desarrolla el procedimiento para la entrega de atención humanitaria de emergencia y transición a las víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas - RUV</p> <p>Resolución 01126 de 2015 Por la cual se adoptan los criterios técnicos de evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad y el índice Global de Restablecimiento Social y Económico de las víctimas de desplazamiento forzado</p> <p>Resolución 289 de 2016 Por la cual se define el proceso de aplicación de los principios de subsidiariedad y concurrencia, en la estrategia de corresponsabilidad para la vigencia 2016.</p> <p>En materia de Gestión del Riesgo:</p> <p><i>Ley 1523 de 2011</i></p> <p>"Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y se establece el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (SNGRD) y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Definida así misma como "un proceso social" (art. 1), contempla la implementación de instrumentos jurídicos para adelantar los procesos de reasentamiento basado en la prevención del riesgo. La atención de áreas con amenazas altas o situaciones de desastre permiten la expropiación y la creación de reservas de tierra con dicha finalidad (art. 40, Función Pública).</p> <p>Para adelantar el proceso de reasentamiento la Ley 1523 de 2012 establece como principios orientadores del SNGRD: 1. La igualdad de las personas ante el Estado; 2. La protección de la vida de las personas, su integridad física y mental; 3. La solidaridad social entre personas naturales y jurídicas; 4. La autoconservación y las medidas necesarias para lograrlo; 5. La participación de todas las autoridades y entidades del orden nacional, comunidades étnicas, asociaciones cívicas, voluntarios, etc...; 6. De diversidad cultural; 7. De interés público o social; 8. De precaución; 9. De sostenibilidad ambiental; 10. De gradualidad mediante procesos</p>	<p>secuenciales, 11. Sistémico en la integración sectorial y territorial; 12. De coordinación y 13. Concurrencia entre entidades.</p> <p>La gestión del riesgo debe verse como un sistema que logra la convergencia de un conjunto de procesos de instituciones públicas (nacional, regional y local), comunitarias y cuerpos de socorro en articulación con las políticas, normas, estrategias, planes, procesos, instrumentos y mecanismos existentes. Su objetivo es llevar a cabo un proceso social de gestión del riesgo para mejorar la seguridad, calidad de vida y bienestar para aportar al desarrollo sostenible del territorio (Ley 1523 de 2012).</p> <p>Decreto 0978 de 2024. "Por medio del cual se adopta la segunda actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Jurisprudencia</p> <p>Sentencia T-025 de 2004. Es una de las sentencias con mayor trascendencia para las víctimas, pues atendió la tutela interpuesta por más de 1150 núcleos de familias desplazadas en promedio de cuatro personas, en su mayoría conformado por mujeres cabeza de familia, menores de edad, personas de la tercera edad y algunas pertenecientes a comunidades indígenas, que reclamaban el amparo y la garantía del goce efectivo de sus derechos básicos fundamentales y constitucionales como el derecho a la educación, a la salud, el trabajo, sobre todo a la vivienda.</p> <p>La sentencia resolvió "declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado. En esta sentencia "la Corte resaltó que es deber del Estado apoyar la estabilización socioeconómica de tales víctimas, para lo cual se torna indispensable su identificación inmediata respecto a sus capacidades personales para extraer conclusiones que faciliten la creación de oportunidades de estabilización, que respondan a sus condiciones reales, y que les permitan subsistir de forma autónoma"⁵³ (JEP, 2023).</p> <p>Sentencia T-865/11. Derecho a la vivienda digna. Esta sentencia se pronuncia sobre el deber de las autoridades administrativas de reubicar a las personas asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable por remoción de masa - Garantía de acceder a una vivienda digna.</p> <p>⁵³ https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/t-421_2019.htm</p>

<p>Sentencia T-256/15. Acción de tutela interpuesta por pueblos indígenas contra la empresa Cerrejón, aborda el caso de la comunidad que ha sufrido un proceso de reasentamiento por causa de la actividad carbonífera. La sentencia resuelve conceder el amparo de los derechos al ambiente sano, a la vida, la salud, al agua potable y a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado sobre las medidas de reasentamiento de las familias a las que pertenecen los accionantes y al reconocimiento y subsistencia como pueblo ancestral de la Comunidad de Negros Afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira. Advertir a las partes accionadas que no podrán adoptarse medidas de reasentamiento de esas comunidades, sin haber agotado el trámite de consulta y obtenido su</p> <p>De la aclaración del voto del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se resalta:</p> <p>Protección de las comunidades afectadas por procesos de reubicación que se derivan de la ejecución de proyectos de desarrollo - marco normativo y jurisprudencial (aclaración de voto)</p> <p>“La Sentencia no se preguntó por la responsabilidad de las autoridades estatales que autorizaron la ejecución de un proceso de reasentamiento realizado al margen de los estándares consagrados en esos instrumentos de protección ni por las implicaciones que se derivan, en el caso concreto, de que la compañía accionada deba consultar a la comunidad de Patilla y Chancleta sobre su reubicación, obteniendo su consentimiento previo, libre e informado. De haberlo hecho, habría advertido que, en el marco de las pautas contempladas en la “Observación General N° 7 sobre los desalojos forzosos”; de las “Directrices completas para los derechos humanos en relación con los desplazamientos basados en el desarrollo” y de los “Principios y Directrices sobre los desalojos y desplazamiento generados por el desarrollo”, los procesos de reasentamiento como el que llevó a cabo El Cerrejón solo proceden excepcionalmente, para promover el bienestar de las personas, familias o comunidades afectadas por la medida y que solo pueden adelantarse si, antes, se les ha brindado información adecuada, oportuna y completa sobre las alternativas al reasentamiento y sobre sus derechos, a través de canales culturalmente idóneos. Tales criterios, evidentemente, no fueron satisfechos en el caso concreto. El fallo tampoco advirtió que el reasentamiento debe garantizar el derecho de las familias reubicadas a una tierra de mejor o de igual calidad, a una vivienda que reúna criterios de adecuación, facilidades de acceso, asequibilidad, habitabilidad, seguridad de la tenencia, adecuación cultural y acceso a servicios públicos esenciales. La valoración de ese asunto se pasó por alto pese a que la tutela cuestionó, expresamente, el enfoque urbanístico del proyecto de vivienda que El Cerrejón adecuó para el traslado. Mencionar esos parámetros habría sido especialmente útil de cara al desarrollo de un proceso consultivo que deberá culminar con el consentimiento de la comunidad de Patilla y Chancleta a las condiciones en las que se efectuará su reasentamiento.</p> <p>Sentencia de Revisión de Tutela T-421 de 2019. Sobre la restitución de tierras despojadas y estabilización económica.</p>	<p>Sobre derechos de personas que habitan en zonas de alto riesgo: Sentencias T-585 de 2008, T-624 de 2011, T-816 de 2012, T-046 de 2015 y T-327 de 2018; derechos de personas afectadas por eventos climáticos extremos: T 530 de 2011, T-295 de 2013, T- 355 de 2013</p> <p>Sentencia T-369/21 derechos de personas afectadas por desastres naturales y debido proceso</p> <p>Sentencia 123 de 2024. Reconoce el desplazamiento forzado por factores ambientales, el déficit de protección constitucional a las personas desplazadas por estas causas, ordena regular la materia y formular una política pública</p> <p>Sentencia 305 de 2024. Reitera jurisprudencia en materia de desplazamiento forzado por factores ambientales. Protege el derecho a una vivienda digna.</p> <p>Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Ley 2294 del 19 de mayo de 2023.</p> <p>La ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”.</p> <p>El Plan Nacional de Desarrollo se estructura en cinco ejes principales, de los cuales, al menos dos de ellos se enfocan en la atención de personas desplazadas o afectadas por alguna de las causas del reasentamiento.</p> <p>a. De las bases del Plan Nacional de desarrollo se puede resaltar:</p> <p>Eje 1: “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental” establece superar los conflictos socioambientales reconociendo las dinámicas y los ciclos del agua, al igual que los ecosistemas, como una prioridad. Ordenar el territorio teniendo al agua como eje central se establece como una forma de garantizar la sostenibilidad del país, adaptándose a las condiciones del clima. Para lograrlo es fundamental la armonización de los instrumentos de planeación reconociendo la diversidad cultural, ambiental y social, así como la protección efectiva de los determinantes ambientales. Dentro de este capítulo se proponen al menos dos aspectos relevantes con relación a los reasentamientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar el nivel de formalización y tenencia de la tierra, especialmente para población desplazada. 2. Atender a las familias reasentadas por eventos que afectaron temporal o definitivamente sus viviendas. <p>Eje tres: 3. “Reparación efectiva e integral a las víctimas” se enfoca en la atención de las víctimas del conflicto armado y hace énfasis en el contexto actual de los desplazados del país afirmando que:</p>
<p>“Cerca de 9,36 millones de colombianos son víctimas del conflicto armado, lo que corresponde aproximadamente al 20% de la población nacional” ... “El desplazamiento forzado es el hecho que más ha afectado a la población, principalmente en las áreas rurales del país con vocación productiva tradicionalmente agrícola, obligándola a asentarse en condiciones de miseria en las ciudades, perdiendo no solo sus medios de producción, sino llevándolos, en muchos casos, a la mendicidad” (Congreso de la república de Colombia, Bases. pág. 235)</p> <p>Para atender esta situación, en las bases del PND 2022-2026, se propone entre otros aspectos:</p> <p>... “fortalecer los procesos más rezagados y con más impacto en la reparación y reconstrucción de los proyectos de vida como lo son los procesos de retorno y reubicación, así como la restitución de tierras y de derechos territoriales; de tal forma que se revierta el desarraigo ocasionado por la violencia y que las víctimas recuperen su capacidad y vocación productiva y, sobre todo, que estos procesos sean sostenibles en el tiempo. Esto implica la necesidad de definir acciones específicas en materia de salud, educación, vivienda y generación de ingresos, de manera que se logre avanzar su estabilización socioeconómica garantizando condiciones de vida dignas. También se requerirán acciones que permitan preservar la vida y garantizar condiciones de seguridad y libertad para toda la población, así como el fortalecimiento de la reparación no material y las garantías de no repetición” (Congreso de la república de Colombia, Bases. pág. 235).</p> <p>De lo anterior, el Estado colombiano reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto armado y las sitúa como eje central y en un lugar preponderante del Plan Nacional de Desarrollo (pág. 236) y propone como “reparación transformadora” cuatro temas que pueden contribuir con los procesos de reasentamiento integral:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Se implementarán los planes de retorno y de reubicación, se garantizará su sostenibilidad y se articulará con otros procesos de planeación y acción institucional como los PIRC, PDET, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y aquellos dispuestos para comunidades y grupos étnicos como los Planes de Salvaguarda y los Planes Específicos de Atención y Protección. Esto, para evitar duplicar la oferta institucional que reciben las comunidades y avanzar hacia la consolidación de una estrategia de reparación en donde la integralidad sea un eje central de la política y no solo un adjetivo inocuo” (...) 2. Estabilización socioeconómica para las víctimas: El esfuerzo de este Gobierno estará centrado en la optimización, priorización y focalización de la población víctima en la oferta social, junto con la creación de componentes diferenciados dentro de esta oferta, de tal forma que se logre avanzar en la garantía de los derechos socioeconómicos más rezagados, como son los derechos a la vivienda y a la generación de ingresos. Estos 	<p>derechos serán la base para la consolidación de soluciones duraderas que permitan la reconstrucción de sus proyectos de vida” (...) (pág. 237).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Restituimos la tierra para armonizar la vida: Las víctimas de desplazamiento, despojo y abandono forzado de tierras serán parte central de la transformación del campo y de las reformas que se propongan para el fortalecimiento de las actividades agropecuarias (...) 4. Hacia la superación de la deuda histórica con los pueblos y territorios étnicos: Para contribuir a la reparación integral de los pueblos y territorios étnicos se consolidará una propuesta de armonización de herramientas que permita articular la política de víctimas, con la política de paz y con lo ordenado por la Corte Constitucional en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional frente a la población desplazada. (pág. 238) <p>Del articulado del Plan Nacional del Desarrollo se resalta: ARTÍCULO 1. OBJETIVOS DEL PND (...) “Tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza” (...)</p> <p>Capítulo II. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental: Busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés sean una prioridad. De este capítulo se enfatiza el siguiente articulado:</p> <p>Sección IV. Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación</p> <p>Artículo 38°. Estrategia nacional de coordinación para la adaptación al cambio climático de los asentamientos y reasentamientos humanos. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, coordinará con las entidades sectoriales del nivel nacional y entidades territoriales, la estrategia nacional de reasentamiento, legalización urbanística, mejoramiento de asentamientos humanos y gestión del suelo, como acción directa de reducción del riesgo de desastres, mitigación y adaptación al cambio climático.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO. Las prioridades de la estrategia estarán enfocadas en asentamientos en alto riesgo, y se tendrán en cuenta entre otros: el ordenamiento de los asentamientos en torno al agua, la financiación de estudios de riesgos, la asistencia técnica para la gestión de suelo y el reasentamiento de hogares en alto riesgo no mitigable y el mejoramiento de las condiciones de hábitat con base comunitaria.</p> <p>Para lograr los objetivos de este pilar el gobierno propone:</p>

1. "Diseñar e implementar una estrategia nacional para la adaptación al cambio climático de los asentamientos y reasentamiento humanos"
2. "Implementar procedimientos y mecanismos financieros para el reasentamiento de la población que habita en zonas de riesgo alto no mitigable, y estudiar los fenómenos de migración por choques climáticos y por desastres asociados a los diferentes fenómenos amenazantes"
3. "Promover la oferta de VIS, y orientar los procesos de reasentamientos en zonas de riesgo no mitigable, entre otros"

Instrumentos de política Pública sectorial

Marco de política de reasentamiento para el proyecto nacional de disposición final de residuos sólidos 2007 ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial

Marco de política de reasentamiento proyecto nacional de transporte urbano. Ministerio de transporte 2010

Plan de reasentamiento de la población habitante del casco urbano de gramalote 2015

Política de reasentamiento metro de Bogotá

Marco de política de reasentamiento plan todos somos pacífico Tumaco y Guapi 2016

Marco de Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI), República del salvador

VI. CONFLICTO DE INTERESES

Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, corresponde enunciar las posibles circunstancias en las que se podría incurrir en conflicto de interés por parte de los congresistas que participen de la discusión y votación del Proyecto de Ley. En ese sentido, señala el artículo 1º de la Ley 2003 de 2019 lo siguiente:

"ARTÍCULO 1º El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así:

ARTÍCULO 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en el ejercicio de sus funciones.

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil."

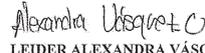
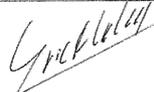
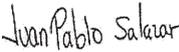
Revisadas las disposiciones que contienen la presente iniciativa se concluye que la misma no tiene la potencialidad de generar conflicto de interés a algún congresista por cuanto no crea beneficios particulares, actuales ni directos, y tampoco lo hace para los parientes o familiares por consanguinidad, afinidad o parentesco civil en los términos del artículo 286 y 287 de la Ley 5 de 1992. No obstante, cada congresista estará obligado a evaluar su situación personal sobre eventuales conflictos de interés que puedan existir el estudio de este proyecto de ley.

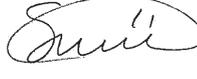
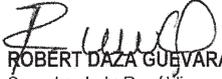
VII. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones", establece, que "el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo". En consecuencia, las iniciativas normativas que ordenen gasto u otorguen beneficios tributarios deben hacer explícito dicho gasto y la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. No obstante, la Corte Constitucional ha precisado en su jurisprudencia –a manera de ejemplo se aprecia la Sentencia C-502 de 2007- que el Análisis del Impacto Fiscal de las Normas se trata de un criterio de racionalización de la actividad legislativa lo cual no puede suponer un veto sobre la misma.

El presente proyecto no ordena gasto, no genera beneficios tributarios adicionales, ni impone cargas impositivas a las entidades del orden nacional o territorial, por lo cual no tiene un impacto para las finanzas del gobierno

De las y los Honorables Congresistas,

 ANDRÉS CANCEMANCE LÓPEZ Representante a la Cámara – Putumayo Pacto Histórico	 LEIDER ALEXANDRA VÁSQUEZ OCHOA Representante a la Cámara por Cundinamarca PACTO HISTÓRICO
 ERICK VELASCO BURBANO Representante a la Cámara por Nariño Pacto Histórico	 JUAN PABLO SALAZAR RIVERA Representante a la Cámara CITREP-1 (Cauca, Nariño y Valle del Cauca)
 SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA Senadora de la República Partido COMUNES	 MARY ANNE ANDREA PERDOMO Representante por Santander Congreso de la República mara.perdomo@congreso.gov.co

 SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA Senadora de la República Partido COMUNES	 ROBERT DAZA GUEVARA Senador de la República Pacto Histórico-Polo Democrático
 CRISTIAN DANILO AVENDAÑO FINO Representante a la Cámara por Santander	 PEDRO JOSÉ SUÁREZ VACCA Representante a la Cámara Pacto Histórico - Boyacá
 EDUARD SARMIENTO HIDALGO Representante a la Cámara por Cundinamarca Pacto Histórico	 Jorge Hernán Bastidas Rosero Representante a la Cámara por el Cauca Pacto Histórico
 LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO Representante a la Cámara por el Huila Pacto Histórico - PDA	

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ETNA TAMAFIA ARGOTE CALDERÓN Representante a la Cámara por Bogotá Pacto Histórico PDA-LLS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Carmen Ramírez Boscán Representante a la Cámara Circunscripción Especial Internacional</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">VIII. REFERENCIAS</p> <p>Acosta Paola Andrea; Yasserp Manuel. Derechos Fundamentales de la población desplazada. En https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/Derechos-fundamentales-de-la-poblacion-desplazada.pdf</p> <p>Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (11 de noviembre de 2021). Cifras de desplazamiento aumentaron en la primera mitad de 2021 por conflictos, violencia y cambio climático. https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/618bfc2c4/acnur-cifras-de-desplazamiento-aumentaron-en-la-primera-mitad-de-2021-por.html</p> <p>Banco Interamericano de Desarrollo. (1998). Reasentamiento involuntario Política operativa y documento de antecedentes. Política Operativa OP-710. https://www.comex.go.cr/media/8689/06-2020-06-22-anexo-4-pol%C3%ADtica-operacional-op-710-reasentamiento-involuntario.pdf</p> <p>Banco Mundial. (2011). Guía de reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre. https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/BM_Gu%C3%ADa_Reasentamiento_FINALPDF.pdf</p> <p>Banco Mundial. (abril de 2020). Desarrollo urbano: Panorama general. https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview</p> <p>Buitrago, Castro Erika; Echeverri Vélez Juliana Vélez. Procesos de reasentamiento en Colombia: ¿una medida de adaptación y protección de derechos humanos de las víctimas del cambio climático? Universitas no.136 Bogotá Jan./June 2018 https://doi.org/10.11144/javeriana.vj136.prcm http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602018000100020</p> <p>Botero Duque, Juan David 2006. El reasentamiento poblacional: fenómeno social, político y de progreso. En: Estudios Socio-Jurídicos., Bogotá (Colombia), 8(1): 145-165, enero-junio de 2006</p> <p>Cancinmance López, Andrés. Reseña https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/48847/49915</p> <p>Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno en https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/ciencias-biologicas/el-fenomeno-del-desplazamiento-por-factores-ambientales</p>
<p>Cornea, MM (2003). Por una nueva economía del reasentamiento: una crítica sociológica del principio de compensación. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 55(175), 37-45. https://doi.org/10.1111/1468-2451.5501004</p> <p>Cornea, MM (2008). Compensación y distribución de beneficios: por qué es necesario reformar las políticas y prácticas de reasentamiento. Water Science and Engineering, 1(1), 89-120. https://doi.org/10.1016/S1674-2370(15)30021-1</p> <p>Correa, E., Ramírez, F. y Sanahuja, H. (2011). Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre. Banco Mundial - l Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR).</p> <p>CIDH. Lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH En https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia-desplazamientointerno.pdf</p> <p>Castillo Cubillos, Mónica Alexandra 2018. Dilemas de la participación en políticas públicas de reasentamiento humano: falla en el diseño del Plan Jarillón de Cali (2012-2017) En https://repositorio.flacoandes.edu.ec/bitstream/10469/13560/14/TFLACSO-2018MACC.pdf</p> <p>Correa, Elena, Sanahuja, Haris, Ramírez, Fernando. 2011. Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre /. Banco Mundial: GFDRR</p> <p>Damonte, Gerardo y Glave, Manuel. 2019. Reasentamiento involuntario: políticas y prácticas en los Andes En Mundo Agrario, vol. 20, núm. 45, 2019 Universidad Nacional de La Plata en https://www.redalyc.org/journal/845/84561360001/html/</p> <p>Departamento Nacional de Planeación. (2018b). Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por Capacidades</p> <p>Global Facility For Disaster Reduction and Recovery [GFDRR]</p> <p>Haris Sanahuja en Correa, Elena, Sanahuja, Haris, Ramírez, Fernando. 2011. Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre /. Banco Mundial: GFDRR</p> <p>IDCM, 2021, UNVEILING THE COST OF INTERNAL DISPLACEMENT 2021. https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC%20Cost%20Estimates%20Report%202021.pdf</p> <p>Ley 1523 de 2012. Por el cual se adopta la política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y se establece el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y se dictan otras disposiciones. 24 de abril de 2012. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141</p>	<p>López López, José Luis 2022. La defensa del agua y el estatuto del lugar: Estrategia y técnica de reasentamiento posdesastre en Mocoa. Universidad Nacional</p> <p>McCarter, Gabriela. América Latina ante el Nuevo "Síndrome de la Rana Hervida": Desplazamiento Forzado por cuestiones ambientales. Agenda Estado de Derecho. 2024/06/06. Disponible en https://agendaaestadodederecho.com/desplazamiento-forzado-por-cuestiones-ambientales/</p> <p>Marco de Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI), República del salvador en https://documents1.worldbank.org/curated/ru/827411551330956506/pdf/Marco-de-Reasentamiento-Involuntario.pdf</p> <p>Marco de política de reasentamiento plan todos somos pazefico tumaco y guapi 2016 En https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/3.MARCO_DE_POLITICA_DE_REASENTAMIENTO_PAZCIFICO_CYB.pdf</p> <p>OCHA, (2022). Panorama de las necesidades humanitarias Colombia https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/colombia_hno_2022_es.pdf</p> <p>OCHA, Desalojo Forzoso. https://www.ohchr.org/es/land/forced-evictions-and-human-rights#:~:text=El%20desahucio%20forzoso%20es%20E2%80%9Cde%20Derechos%20En%20C3%B3micos%2C%20Sociales%20y</p> <p>Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres [UNDRR], 2020</p> <p>Serje, Margarita, and Stefano Anzellini, editores 2011. Los Dilemas Del Reasentamiento: Debates y Experiencias de La Mesa Nacional de Diálogos Sobre Reasentamiento de Población. 1st ed., Universidad de los Andes, Colombia.</p> <p>Serje, M. (2011). Introducción a los debates sobre procesos y proyectos de reasentamientos. En M. Serje y S. Anzellini (Eds.), Los dilemas del reasentamiento: Debates y experiencias de la mesa nacional de diálogos sobre reasentamiento de población (1ª ed., pp. 17-42). Universidad de los Andes, Colombia. http://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt18pkdm9.9</p> <p>Softestad, 1991, en Serje, 2011; Linebaugh y Rediker, 2005, en Serje, 2011 https://www.portafolio.co/economia/regiones/colombia-emergencias-climaticas-que-vivira-el-pais-en-el-segundo-semester-del-2024-medio-ambiente-604884</p> <p>https://www.unidadvictimas.gov.co/es/regik,mstro-unico-de-victimas-ruv/37394</p> <p>https://defensoria.gov.co/-/durante-el-2023-en-colombia-cerca-de-121.000-personas-fueron-v%C3%ADctimas-de-desplazamiento-forzado-masivo-y-confinamiento</p>

PROYECTO DE LEY N° _____ DE 2024 CAMARA

“Por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los trescientos noventa y ocho (398) años de la entrega oficial del Territorio Ancestral, resguardo indígena de San Lorenzo, en el Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas, República de Colombia, y se dictan otras disposiciones”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1: Objeto: La Nación y el Congreso de Colombia, rinden público homenaje y se asocian a la Conmemoración de los trescientos noventa y ocho (398) años de la entrega oficial del Territorio Ancestral, resguardo indígena de San Lorenzo del Municipio de Riosucio, Caldas, y se adoptan disposiciones con ocasión a esta celebración.

Artículo 2: Reconocimiento: Reconózcase a la comunidad indígena del territorio ancestral de San Lorenzo, del Municipio de Riosucio, departamento de Caldas, por su pervivencia histórica y aporte al desarrollo, fortalecimiento y manifestación de la diversidad étnica del país.

Artículo 3: Autorización. Autorícese al Gobierno Nacional de conformidad con los artículos 334 y 345 de la Constitución Política de Colombia, para que pueda

incorporar dentro del presupuesto General de la Nación las partidas presupuestales necesarias para ejecutar programas y proyectos asociados a la conmemoración de los trescientos noventa y ocho (398) de entrega oficial de este territorio indígena, entre ellos:

Para la reconstrucción de su memoria histórica como pueblo indígena.

Para el fortalecimiento cultural de sus diversas expresiones artísticas, culturales y espirituales como pueblo indígena.

Para el desarrollo de la educación propia, las artes, y los saberes en las instituciones educativas a favor de los niños, niñas y adolescentes.

Para el acceso a equipos y nuevas tecnologías que permitan el crecimiento formativo en las instituciones educativas.

Para el fortalecimiento de las estructuras propias de gobierno, la guardia indígena y la justicia propia como forma de preservar el territorio entregado.

Artículo 4: Acto de conmemoración. El Ministerio de Cultura y el congreso de la Republica realizarán un acto conmemorativo en el año 2025, en el territorio indígena del resguardo de San Lorenzo, el cual será programado, acordado y definido con esta comunidad indígena.

Artículo 5: Promoción y fortalecimiento de la historia cultural y diversidad de esta comunidad indígena. Autorícese al Ministerio de Cultura para financiar la

publicación de una obra escrita por esta comunidad, que haga alusión a su historia, sus luchas y su vida cultural, como una forma de pervivencia y rescate de la memoria de los mayores de este territorio indígena.

Artículo 6: La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

De los honorables congresistas.

Handwritten signatures and names of congress members, including Norman David Bañol Álvarez, Acmeth Escap, and others.

Norman Bañol, Representante a la Cámara, Circunscripción Especial Indígena

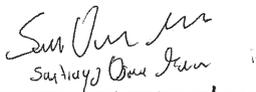
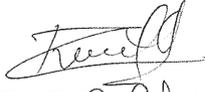
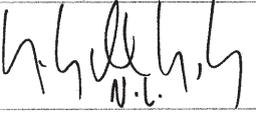
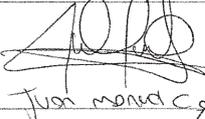
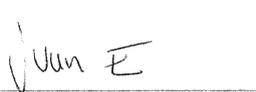
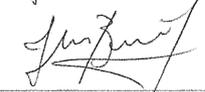
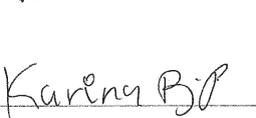
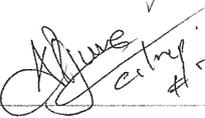
Handwritten signatures and names of congress members, including Alejandro Ocampo, Dorina Hernández, and others.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Alvaro Mondragón, Pedro Valle

I. Objeto. Jairo Acuña, Dep. Magdalena, Fianza Ciudadana

Este proyecto de ley tiene como objeto exaltar y conmemorar los 398 años de entrega oficial del territorio que hoy se conoce como Resguardo ancestral San Lorenzo, ubicado en el municipio de Riosucio, caldas. Además, establecer unas autorizaciones para que el gobierno nacional pueda incorporar los recursos en el presupuesto general destinados a realizar unos programas y proyectos asociados a la conmemoración.

II. Justificación. El territorio ancestral del resguardo indígena de San Lorenzo, esta ubicado en el municipio de Riosucio en el alto occidente del departamento de Caldas, y de

 San Juan San Juan	
 N.L.	 Juan Manuel Cortés
 Juan E	
 Kariny B.	 Juan Manuel Cortés #7

Siempre que el Congreso de la República haya incluido la autorización del gasto en una ley, el Gobierno tiene competencia para incorporar las partidas autorizadas en el proyecto de presupuesto, pero también puede abstenerse de hacerlo, pues le asiste un margen de decisión que le permite actuar en tal sentido y "de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y las prioridades del Gobierno, siempre de la mano de los principios y objetivos generales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las disposiciones que organizan el régimen territorial repartiendo las competencias entre la Nación y las entidades territoriales".

Como queda demostrado, el proyecto de ley no establece erogaciones públicas o cargas impositivas que generen un impacto fiscal. Por su parte, la autorización al poder ejecutivo frente a las acciones en favor de la comunidad indígena de San Lorenzo son dispositivas mas no impositivas. Y como lo advierte la Corte Constitucional, que no corresponde a este caso, si se autorizara gasto público en el proyecto de ley, sería potestativo del ejecutivo y en todo caso, estaría sometido al presupuesto general y a las reglas del impacto fiscal.

En conclusión, el proyecto de ley no establece unos montos obligatorios en el gasto público y el cumplimiento de sus disposiciones está siendo autorizado al ejecutivo, sin que representen erogaciones exorbitantes, correspondiendo a actos de reconocimiento y rescate de la memoria histórica de la comunidad indígena de San Lorenzo, del municipio de Riosucio, Caldas.

IV. Impacto fiscal

Los congresistas tienen la potestad de presentar proyectos de ley, incluso, aquellos que representan gasto público. Sin embargo, las altas cortes del país han precisado que será necesario exponer y explicar lo relacionado con el impacto fiscal que pueda ocasionar.

En el caso concreto, este proyecto de ley no tiene como objeto establecer cargas al presupuesto público. Su objeto es de honores o reconocimiento por los aportes de una comunidad indígena a la diversidad étnica del país. Por su parte, las acciones de reconocimiento, como pueden ser actos públicos, no representan un impacto fiscal que amerite conceptos o desarrollos expositivos sobre la financiación para el cumplimiento de lo consagrado en el proyecto de ley.

Sin embargo, debe precisarse que el artículo 3 dispone la autorización al gobierno nacional para disponer de recursos con el objeto de adelantar acciones, programas y proyectos asociados a la conmemoración. Sin embargo, la disposición está autorizando al ejecutivo, mas no está obligando a ningún gasto público. En otros términos, el ejecutivo está siendo autorizado para establecer acciones asociadas a la conmemoración, el cual, por regla general, deberá atender el presupuesto general y la regla de impacto fiscal.

Sobre este asunto se ha pronunciado la Corte Constitucional en la sentencia C-290 de 2009, donde aclaro lo siguiente:

situación concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hipótesis o casos".

Estas leyes se limitan entonces, como lo dice el artículo 150, numeral 15 de la Constitución vigente, a 'decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria' y de manera alguna pueden desprenderse de su contenido, efectos contrarios a su origen, o interpretaciones diversas que se aparten del sentido de la ley.' 3. El legislador puede adoptar diversas acciones para exaltar o asociar a la Nación a la persona, situación u organización objeto del decreto de honores, de manera tal que las categorías avaladas por la Corte solo tienen carácter enunciativo.

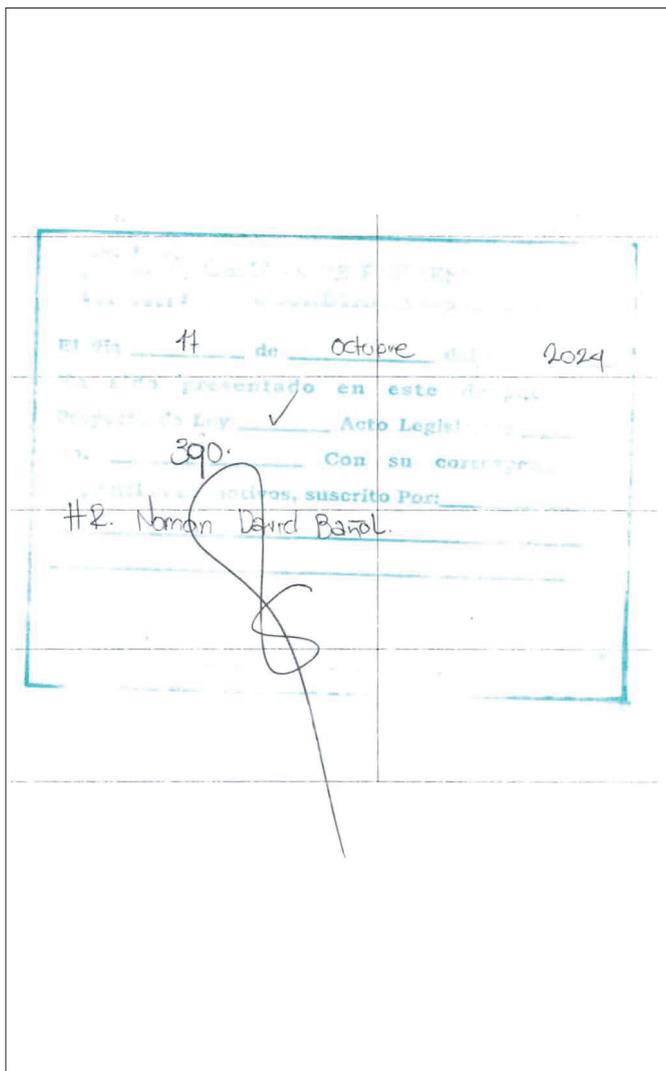
De acuerdo al desarrollo analítico e interpretativo de las sentencias de la Corte Constitucional, las leyes de honores "pueden ser utilizadas para una exaltación de hechos, lugares o instituciones que merecen ser destacados públicamente, para promover valores que atañen a los principios de la Constitución"⁶. Estas leyes tienen un carácter singular con un alcance dirigido a una situación concreta. Finalmente, se acoge las conclusiones de la Corte que afirma: "este tipo de leyes se pueden entremezclar aspectos relacionados con la asignación de partidas presupuestales para obras de interés social relacionadas con la celebración, aniversario u honor y, en este caso, no debe considerarse como rentas de destinación específica porque no se trata de ingresos permanentes del presupuesto nacional."⁷

⁶ Corte Constitucional, sentencia C-162-2019.
⁷ Corte Constitucional, sentencia C-162-2019.

<p>tipo de leyes "no crean, extinguen ni modifican situaciones jurídicas objetivas y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singulares, cuyo alcance es únicamente la situación concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hipótesis o casos".</p> <p>Con posterioridad, la sentencia C-817 de 2011¹¹¹³ hizo una síntesis de las reglas jurisprudenciales sobre las leyes de honores. Allí señaló los siguientes aspectos: "La jurisprudencia constitucional ha fijado un grupo de reglas particulares acerca de la naturaleza jurídica de las leyes de honores, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente: 1. La naturaleza jurídica de las leyes de honores se funda en el reconocimiento estatal a personas, hechos o instituciones que merecen ser destacadas públicamente, en razón de promover significativamente, valores que interesan a la Constitución. Como lo ha previsto la Corte, las disposiciones contenidas en dichas normas "... exaltan valores humanos que, por su ascendencia ante la comunidad, han sido considerados como ejemplo vivo de grandeza, nobleza, hidalguía y buen vivir, y por ello se les pone como ejemplo ante la posteridad". 2. Contrario a como sucede con la actividad legislativa ordinaria del Congreso, las leyes de honores carecen de carácter general y abstracto, agotándose en su expedición de manera subjetiva y concreta, respecto de la persona, situación o institución objeto de exaltación. En términos de la jurisprudencia reiterada, [e]sta clase de leyes, debe anotarse, producen efectos particulares sin contenido normativo de carácter abstracto. Desde el punto de vista material, no crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas objetivas y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, pues simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singulares, cuyo alcance es únicamente la</p>	<p>No sin antes indicar que estos asuntos de leyes de honores, ya ha sido analizado por la Corte Constitucional, quien orienta su jurisprudencia en el siguiente sentido.</p> <p>Consideraciones jurisprudenciales sobre las leyes de honores o de reconocimiento.</p> <p>De acuerdo a la Corte Constitucional, este tipo de leyes tienen unas consideraciones en cuanto a su objeto y su alcance, incluido el aspecto presupuestal. Miraremos cual es la posición de la Corte Constitucional, para terminar, analizando si el proyecto de ley cumple con los criterios jurisprudenciales.</p> <p>Para dar desarrollo a este propósito se cita sentencias de la Corte Constitucional, a saber:</p> <p>La sentencia C-162 de 2019, indica que las leyes de honores se encuentran reguladas en el artículo 150, numeral 15, superior, al tenor del cual el Congreso podrá "Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria". En cuanto a su contenido y objeto indico, cita la sentencia C-057 de 1993, para señalar que "no es necesario que se detalle particularmente el nombre de cada una de las personas a las que se debe exaltar y dispuso que este reconocimiento se puede dar de forma abstracta o impersonal, sin efectuar individualizaciones". Siguiendo con el desarrollo jurisprudencial se encuentra la sentencia C-766 de 2010¹¹¹⁴, la cual determinó lo siguiente:</p> <p>"las leyes de honores "son cuerpos normativos en cuyas disposiciones se exaltan valores humanos que por su ascendencia ante la comunidad, han sido considerados como ejemplo vivo de grandeza, nobleza, hidalguía y buen vivir" y se indicó que este</p>
<p>En ese trasegar de lucha se tiene que esta comunidad indígena, junto a las demas, existentes en Riosucio, Caldas, han sido objeto de medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta realidad atiende a la persecución como pueblo diferenciado con aspiraciones organizativas colectivas. Del mismo modo, fueron sujetos colectivos amedrentados por grupos ilegales al margen de la ley, incluyendo dos tomas guerrilleras al centro poblado de este resguardo indígena. Por esta razón, se tiene una sentencia de restitución de tierras del año 2018 a favor de esta comunidad indígena.</p> <p>Lo que se ha descrito comprueba los años de conmemoración y las razones para considerar la importancia de hacer este reconocimiento.</p> <p>III. Aspectos normativos.</p> <p>La Constitución Política de Colombia en su artículo 150, numeral 15, dispone que es función del congreso crear las leyes, y en el marco de estas, decretar honores. En concordancia con este artículo se encuentra los artículos 7, 8 y 10, los cuales desarrollan de forma particular el deber del Estado de proteger y promover la diversidad étnica del país.</p> <p>En este orden, la iniciativa que pretender reconocer el aporte histórico de una comunidad indígena y generar una conmemoración por aun existir y pervivir a través del tiempo, tiene respaldo constitucional y es acorde a las competencias que se tienen como miembro de la Cámara de Representantes.</p> <p>Adicional a la Constitución Política, tiene respaldo en la Ley 3 y en la Ley 5 de 1992.</p>	<p>La Resolución 010 del 29 de junio de 2000, reitira lo siguiente:</p> <p>Como es sabido, el origen del Resguardo de San Lorenzo se remonta a los tiempos de la Corona Española, que en 1597 crea los Resguardos de La Montaña y Lomapieta, pero la definición territorial sólo viene a darse integralmente para toda la región en 1627, cuando visitó la región el oidor Lesmes de Espinosa y Sarabia, miembro de la Real Audicencia de Santafé de Bogotá, quien el 15 de marzo de 1627 delimita el resguardo a los indígenas de La Montaña, y el 22 de marzo siguiente baja a la Vega de Supía y entrega tierras de resguardo a las tribus de Supía la Alta, Supía la Baja, Pirza y Umbra, y además a "los indígenas traídos de Sonsón, jurisdicción de la ciudad de Arma". Estos indígenas provenientes de Sonsón son los ascendientes de los habitantes actuales del Resguardo de San Lorenzo.⁵</p> <p>Las citas expuestas dan cuenta del momento histórico que vivió esta comunidad indígena desde el año 1627. La conmemoración atiende a considerar que cerca de cumplir cuatro siglos, esta comunidad indígena se mantiene con sus usos y costumbres. A partir de su historia, se ha presentado una ferrea lucha por no desaparecer, por reconstruir su historia y afianzar su relación con el territorio entregado.</p> <p>De esta forma, se convierte en 397 años de lucha y resistencia de una comunidad indígena en el país, y a la vez, una historia de aportes a la riqueza cultural y diversa de ese país.</p> <p>⁵ Ibid, p 169.</p>

<p>encomendero de los indios de Supia la Alta y Arquía, y el otro peso a costa de Manuel Barbosa, encomendero de Supia la Baja, y el otro peso a costa de doña María Redondo, mujer de Rodrigo de Albarraán, encomendero de los indios de Pirza, y para ello y su dependiente se le dé comisión con vara de la real justicia, y así lo proveyó, mandó y lo señaló.= [hay una rúbrica].= ante mí, Rodrigo Zapata [rubricado].³</p> <p>Población de los indios traídos de sonsón estancia de miguel morillo. Luego, incontinentemente, el dicho señor oidor pasó a otra loma donde están otros ranchos que dijeron ser de Miguel Morillo, y mandó lanzar la gente que allí estaba y desembarazar los dichos ranchos, y el dicho 84 Miguel Morillo llevó todo lo que había en los bohíos a un rancho que tiene hecho de la otra parte de la dicha quebrada, y estando desembarazados [desocupados] hizo venir ante su merced toda la gente de Sonsón y los metió en la posesión de los dichos bohíos y tierra que allí hay y les dijo que toda la tierra que había de la dicha quebrada hasta la caída de la misma loma donde están los ranchos, que cae a la banda de Supia la Baja, corriendo toda la loma arriba hasta la Montaña les señalaba para poblarse con sus casas allí donde estaban los dichos ranchos de los dichos Miguel Morillo y doña María de Cartagena, a los cuales mandó no los deshiciesen, que su merced del dicho señor oidor mandaría a los dichos indios les ayudasen a hacer otros en el sitio donde su merced les ha permitido hacerlos, y las demás tierras de la dicha loma para sus rozas, y los dichos indios de Sonsón dijeron que estaba bueno y que ellos estaban contentos.⁴</p> <p>³ Ibid., p 81. ⁴ Ibid., p 83</p>	<p>hoy dicho día a los aposentos del dicho Francisco 80 Llorente, de todo lo cual que así paso yo el escribano doy fe. Testigos el capitán don Pedro Dosma y don Francisco de Ospina, alguacil mayor de esta visita y otras personas, y señor oidor los señaló.= [Hay una rúbrica].= Ante mí, Rodrigo Zapata [rubricado].²</p> <p>Entrega de resguardos en la vega de supia, incluyendo el actual de san lorenzo para los indios traídos de sonsón población de la vega. En los aposentos de Francisco Llorente, jurisdicción de la ciudad de Anserma, a veinte y dos días del mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y siete años, el señor doctor Lesmes de Espinosa Sarabia, 82 del Consejo de su majestad y su oidor más antiguo de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada y visitador general de los partidos de Anserma y Cartago y los demás de tierra caliente, dijo que su merced ha mandado reducir y poblar en el nuevo sitio de la Vega los indios de Sonsón que se trajeron de la jurisdicción de la ciudad de Arma, y los de Supia la Alta, y los indios de Supia la Baja y los de Pirza y Umbria, para que sean doctrinados todo el año, y para que con efecto se ejecute [se cree] esta población y los ganados se echen fuera y se demuelan los hatos donde están, su merced quiere personalmente ir Lugo de dicho nuevo sitio de la Vega para poner en orden y asiento las cosas de estos naturales, y atento a que su merced nombró a Gonzalo Gómez de Herrera por poblador de estos indios y está informado que por algunos impedimentos no puede por ahora acudir a esto, nombra para la buena ejecución de esta población al capitán don Pedro de Osma, para que se ocupe en ella los días necesarios, y en cada uno de ellos haya y lleve de salario tres pesos de oro de veinte quilates que cobre y se haga por pagado y sea a costa el un peso de don Lucas de Salazar,</p> <p>² CAICEDO, LUIS JAVIER. "Los títulos de San Lorenzo. Recopilación y estudio de los títulos de propiedad del resguardo indígena de San Lorenzo, Riosucio, Caldas, con miras al saneamiento integral del territorio. Resguardo indígena de San Lorenzo, 2009. P 78.</p>
<p>aparecieron los indios de los pueblos de Supia Alta y Baja y los de Sonsón, y se vio el resguardo de los indios de Supia la Baja que le dio Pedro de Alvarado, Juez de Tierras, y estancias, y se vio ocularmente con vista de ojos los términos y tierras de él, y se vio la ramada y bohío que es grande y buena para la iglesia de la nueva población de la Vega. Aquí se vio la petición del protector de los naturales de esta visita por los indios de Supia la Alta, que pidieron aparte, con la pintura y figura que se hizo, que se les dio a entender a todos estos indios para su población. Y se les dijo que esta casa y bohío es por ahora buena para iglesia, y delante de ella a la parte de arriba se ha de hacer una plaza grande cuadrada y aposentos del padre, y en su contorno de la plaza se ha de hacer el poblado por cuatro partes: Supia la Baja, Supia la Alta, Pirza y Sonsón. Y que esta población se ha de ejecutar y se les da los mismos resguardos de Supia la Baja y se les aumentará por la flaqueza de las tierras y más número de indios que se han de juntar todas las [tierras] que fueren necesarias. Luego los dichos indios por mandado de dicho señor oidor visitador cortaron y levantaron los bareques del bohío para que se haga la iglesia y el altar, y que se traiga la campana de Supia la Baja a la dicha nueva iglesia. Y se vio la labranza del cacique de Supia y desde luego les dijo que les señala todo lo llano de la Vega, desde la quebrada Curumbira al río, y del río grande [río Cauca] arriba y todo el resguardo de Supia la Baja, y que se ha de hacer una palizada de la banda del río a la banda de la iglesia del Real de la Vega, y que los dueños de los hatos y estancias tengan sus aposentos en el Real de la Vega. y se vio ganado vacuno de la Vega, y la acequia para traer agua para servicio de los indios y regadío de sus huertas y labranzas. Vióse que este sitio es bueno y templado, al cual llegaron los indios de Sonsón, y se les dio a entender que han de ser del rey nuestro señor y que tendrán persona que mire por ellos y los ampare y que se les señalarán tierras. Y luego se visitó y paseó y vióse por vista de ojos la dicha Vega, y con esto se volvió</p>	<p>Esta obra fue publica en este resguardo indígena en el año 2009.</p> <p>El primer asunto a confirmar es la entrega de este territorio desde el 22 de marzo del año 1627. Con esto para indicar que el 22 de marzo del año 2025, se cumplen 398 años de haber sido entregado este territorio.</p> <p>"Los títulos originarios de propiedad como resguardo del pueblo, parcialidad o comunidad de indígenas de San Lorenzo provienen del 22 de marzo de 1627, cuando el oidor de la Real Audiencia de Bogotá, Lesmes de Espinosa y Saravia, les hizo entrega a los indígenas traídos de Sonsón de unos terrenos comprendidos entre el río Arcón y el Resguardo de la Montaña y desde el río las Estancias hasta límites con el Departamento de Antioquia. Estos títulos se consideraron perdidos desde 1820, pero fueron encontrados en 1990 en un expediente judicial, pues venían agregados a una reposición de títulos que hiciera el virrey José Solís Folch de Cardona al Resguardo de la Montaña en 1759."¹</p> <p>Población de los indios de la vega de supia, y fundación del poblado. llegada de los indios sonsones (hoy San Lorenzo) y visita a quiebralomo. vista de los hatos de la vega.= el 20 de marzo de 1627, el dicho oidor visitador partió de los aposentos de Francisco Llorente para ver por vista de ojos los hatos de ganados mayores que hay en la Vega y su contorno, y habiéndose 79 llegado a ella se vieron de la otra banda [orilla] del río de Supia los hatos de Francisco Romero y de Cristóbal Sánchez Hellín y de García Pérez y una roza y labranza de maíz; en la punta del río más abajo vióse la Vega y se llevo al bohío y molino que llaman del Gobernador, donde</p> <p>¹ CAICEDO, LUIS JAVIER. "Los títulos de San Lorenzo. Recopilación y estudio de los títulos de propiedad del resguardo indígena de San Lorenzo, Riosucio, Caldas, con miras al saneamiento integral del territorio. Resguardo indígena de San Lorenzo, 2009. P 34.</p>

E



CONTENIDO

Gaceta número 1848 - Jueves, 31 de octubre de 2024

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY

Págs.

Proyecto de Ley número 387 de 2024 Cámara, por medio de la cual se establecen los parámetros generales para la creación de la Política Pública Nacional de Reasentamientos Integrales y se dictan otras disposiciones..... 1

Proyecto de Ley número 390 de 2024 Cámara, por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los trescientos noventa y ocho (398) años de la entrega oficial del Territorio Ancestral, Resguardo Indígena de San Lorenzo, en el municipio de Riosucio, departamento de Caldas, República de Colombia, y se dictan otras disposiciones..... 16